

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

Proposición condenada por la Santa Sede:
«Romanus Pontifex potest ac debet cum progressu, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese reconciliare et componere.»

DIARIO DE LA TARDE.

Proposición condenada por la Santa Sede.
«El Romano Pontifex puede y debe reconciliarse y avenirse con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna.»

PUNTOS DE SUSCRICION.—En Madrid: 12 rs. al mes.—En Provincias: 20 rs. al mes y 60 por trimestres en casa de los comisionados, y 12 rs. al mes y 54 trimestre en la administración.—En el Extranjero: 30 rs. trimestre.—En Ultramar: 20 rs. trimestre.—La administración no responde de los sellos que se le remitan en carta sin certificar.

PUNTOS DE SUSCRICION.—Madrid: En la Administración, calle de Silva, número 49, entresuelo, y en las librerías de la Publicidad, Olamendi, Lopez, Bailly-Baillière, Cuesta y Lizcano.—Provincias: En los puntos que se anuncian el último día de cada mes.

PARTE EXTRANJERA.

La soberanía nacional italiana, por conducto del Parlamento turines, acaba de decretar la *unificación administrativa de Italia*; ó lo que es lo mismo, una votación parlamentaria acaba de resolver que el Código piemontés rija de aquí en adelante en cinco ó seis Estados, cuya historia, tipografía, climas y costumbres son distintos esencialmente de los piemonteses.

Absurdo de semejante resolución parlamentario-legislativa, será sin embargo acatado y aun santificado por los amantes del progreso y la civilización moderna, los cuales declararán que esta ha sido la expresión de la voluntad nacional del gran reino. Superchería de tamaño igual ó superior á los de aquel absurdo en todos los casos análogos y la cual en este realzarán los siguientes apuntes estadísticos: Número de los diputados que forman el Parlamento italiano. 440

Idem de los presentes al votar esta ley unificadora. 226
Han votado en pró. 149
Han votado en contra. 77
No concurrieron por consiguiente á este acto. 214

Y el proyecto unificador se votó por mayoría de. 72
Ahora bien: uniendo los 77 votos contrarios á este proyecto, que ya es casi una ley, al número de 214 diputados ausentes, se forma un total de 291 diputados, los cuales, entre 440, total de los que forman el Parlamento italiano, ó no han manifestado cuál es la voluntad de los pedazos de soberanía que cada uno de ellos representa, ó han declarado ser esta soberanía contraria al proyecto unificador.

Ensanchando este cálculo respecto al peso y medida de la soberanía nacional que ha decretado sean regidos con iguales leyes un piemontés y un florentino, por ejemplo, vamos á ver qué porción de soberanía italiana representan los 149 diputados que así decretaron.

¿Cuál es la población del reino de Italia?..... 22.000.000.

¿Cuál fué el número total de electores italianos que tomaron parte en la elección del actual Parlamento?..... 170.000.

¿Cuál es la tercera parte de 170.000, que es la parte correspondiente al número de diputados del gran reino que han aprobado la ley unificadora?..... 56.666.

Luego, en población de veintidos millones de almas es expresión de la voluntad de todas ellas y ley por consiguiente que á todas obligará, la voluntad de ciento cuarenta y nueve diputados, los cuales sólo han sido elegidos tales por mayoría obtenida entre 56.666 electores.

Pues no hay que darle más vueltas. Tal es el modo con que se manifiesta la voluntad de un pueblo de veintidos millones de almas, y tal es la soberanía que á cada una de estas almas corresponde en Italia el año del progreso 1865 y lo del desconocimiento á Rusia y Prusia que los liberales no se entretienen en sacar las deducciones de unos datos que tan bien avaloran la soberanía nacional. En cambio el sentido común lo está y seguirá haciéndolo, y al cabo el diablo acabará cargando con lo que es suyo.

Y porque con ingredientes iguales á los que han formado esta ley unificadora se ha amasado la *unidad italiana*, y porque cosa del diablo es la *susodicha unidad*, el diablo va cargando con ella, y muy apriesa. Organos suyos tan celosos como es la *Opinion* exclaman ya: «la desconsoladora flojedad de nuestra renta y demás valores, que lamentábamos en nuestro último boletín, se ha aumentado.» Esto es «ya me comen, ya me comen por do más pecado habia.»

Pues por la parte de los reconocimientos, también amenaza con deshacerse el gran reino; y lo del *desreconocimiento* á Rusia y Prusia que nos anunciaba un corresponsal romano en el párrafo inserto en nuestra última *Revista*, debe tener muy serio fundamento, cuando la italianería periodística ha creído necesario echar á volar una especie que supone en tratos á Napoleón III con varios de los amigos que en Alemania tiene, para ver si logra que algunos Estados de la Confederación germánica reconozcan el gran reino.

Esta suposición de la periodistería italianesca, podrá no ser absurda, pero lo sería tanto en Bonaparte semejante empeño, corriendo el año de 1865, que casi nos atreveríamos á asegurar que S. M. cesárea no se ha metido con formalidad en tales dibujos.

Eso sí, á Bonaparte en la actualidad le haría muy al caso enviar á Italia una flota para desescamar un tanto á los italianos del Piemonte, á los cuales desde el discurso de marras se les ha puesto entre ceja y ceja; pero la influencia bonapartista va marcando un paso parecido al

que el gran reino lleva, y aparte del Sr. Coburgo ó cualquiera otro duquezueto de su especie, no encontrará Napoleón III en Alemania quien le saque del apuro.

La escama de los piemonteses á que nos hemos referido, va tan picando en historia, como que se han dado á desenterrar hechos históricos para recordar á Bonaparte que no hay enemigo pequeño, y para advertirle con ejemplos de alianzas hechas repentinamente con Austria en otros tiempos, que el pequeño estado que se apoya en el pie de los Alpes, puede convertirse para él en hueso tan duro de roer como fué para Luis XIV, en tiempos de Pedro Micca.

Además, reforzando los recuerdos con las alegorías, el día 26 de Febrero los piemonteses inundaron á Turin con retratos de aquel valiente patricio, el cual se sepultó con una columna francesa bajo los escombros de una mina que por su propia mano hizo saltar, y á aquellos retratos ha acompañado la siguiente leyenda: «Respuesta que da á Napoleón III el pequeño Estado que está al pie de los Alpes.»

En efecto, como el telegrama anunció, el Cardenal Vicario de Roma, ó lo que es lo mismo, el Cardenal que representa en el gobierno de la Iglesia de Roma al Soberano Pontífice, ha publicado con ocasión del jubileo concedido por la Enciclica unas instrucciones, en que recuerda y condena los errores condenados en el *Syllabus*, y señala como errores especialmente condenables la libertad de conciencia y de cultos proclamada como derecho legal, el derecho reconocido á cada individuo de poder publicar por medio de la prensa principios erróneos, y por último, la declaración de que la voluntad del pueblo es ley suprema.

La *France*, que después de haber interpretado muy libremente el folleto de monseñor Dupanloup, ha sido uno de los periódicos que más libremente han proclamado que *Roma* admita la interpretación de aquel folleto, menciona estas interpretaciones de Su Emma. el Cardenal Vicario, y comenta la noticia con las siguientes palabras, que no han menester de comentarios: «Este resumen prueba que la interpretación dada en Roma á la Enciclica no es exactamente la interpretación del señor Obispo de Orleans.»

Exacto, Sr. Lagueronniere; y á no dar por supuesto que se hubiera Vd. caído en algún nido, nadie habría podido suponer que Vd. creyera nunca lo contrario.

En Prusia, Gobierno y Parlamento se espían, y mutuamente se juegan varias morisquetas. Entre las últimas jugadas por el Parlamento, merece especial mención un proyecto para aumentar el pré de los soldados, cabos y sargentos, con el fin de parlamentarizarlos: entre las últimas morisquetas del Gobierno se cuenta la de ensanchar las facultades de las clases jornaleras en todo lo relativo á la tasa de jornal y horas de trabajo, con el fin de ministerializarlos. Las dos morisquetas recuerdan el adagio, de cojo á cojo muletazo; pero ninguna responderá satisfactoriamente el objeto de los jugadores, y mientras llega la hora de las soluciones el juego en Prusia andará entre bobos.

D. Maximiliano continúa demostrando en Méjico que es todo un hombre. Últimamente ha decretado que en aquel su Imperio, no corra sin *exequatur* bula ni nada que de Roma venga.

Chúpate esa!

TELEGRAMAS.

New-York, 22.

Se supone que el general Borgard ha evacuado á Charleston para concentrar sus fuerzas á fin de presentar batalla al general Sherman.

Una correspondencia del *Morning-Herald* cree que á la evacuación de Charleston seguirá en breve la de Richmond; así lo hacen prever las noticias que diariamente se reciben.

El *York-Times*, al ocuparse del Imperio mejicano, dice que el general Valdes, jefe del movimiento clerical, que se había unido á los del partido republicano para operar juntos contra los partidarios de Maximiliano, han sido batidos por los franceses en Tacatilan. En Méjico no se ha publicado la Enciclica por no haberlo autorizado aún el Gobierno.

VIENA, 3.

La *Gaceta Austriaca* dice saber que las proposiciones prusianas han sido declaradas inaceptables.

ROMA, 3.

El *Observatore romano* está autorizado para demostrar que Roma haya formado proyecto alguno de conciliación entre el Papa y el Emperador Maximiliano relativo á asuntos religiosos.

LISBOA, 4.

El marqués de S. da Bandeira ha declarado á su majestad fidelísima el Rey de Portugal que no ha podido formar ministerio. El conde de Torres Navas ha sido llamado por S. M. para organizarlo, pero no ha aceptado.

Se asegura que el ex-presidente del Consejo de ministros Loulé, será llamado de nuevo, pero se cree que tampoco podrá formar ministerio, en cuyo caso militan en favor de la oposición todas las probabilidades para allanar el cometido de que se trata.

PARIS, 4.

El periódico la *Patrie* publica una correspondencia de Lima con fecha 26 de Enero, añadiendo algunos pormenores á los ya conocidos sobre las negociaciones entre el Gobierno peruano y el general Pareja para la conclusión de la paz.

Segun dicha correspondencia, el cuerpo diplomático ha insistido mucho aconsejando al presidente Pezet para que aceptase las condiciones impuestas en el ultimatum.

La *Patrie* hace constar que el arreglo lleva consigo el reconocimiento del Perú por España, reconocimiento que hace 40 años solicitaba la república.

La Bolsa de hoy ha sido mala para todos los valores mobiliarios.

El Norte de España ha bajado á 295.

LISBOA, 5.

Continúa la crisis. La opinión más general es que volverá á encargarse del ministerio el duque de Loulé. Sa da Bandeira ha resignado el encargo de formarle. Algunos hablaban del conde de Torresnavas, del conde de Castro, y otros de Saldanha.

PARIS, 5.

Terminados ya los tratados de comercio, de navegación y de comercio literario, estipulados entre Francia, Ambourg, Lubek y Bremen, comenzarán á regir en toda su fuerza y vigor desde el 1.º de Julio próximo.

Los intereses de los bonos del tesoro, se rebajan, á empezar desde el 6 de Marzo próximo, á un 3 ó 3 1/2.

CONSTANTINOPLA, (sin fecha).

Las negociaciones y proyectos financieros han vuelto á emprenderse con el banquero Mr. Laing. Se cree que tendrá buen resultado. Se trata de la conversión de la deuda interior, y del papel moneda en deuda exterior amortizable, pagando 5 0/0 de interés, como los Gobiernos europeos.

PARIS, 4.

En la Bolsa hoy quedaban: el 3 por 100 interior español, á 42 1/8; 3 exterior, á 00 0/0; la diferencia á 00 0/0; la amortizable á 00 0/0; 3 por 100 franceses á 67 50; y el 4 1/2 á 97.

LONDRES, 4.

Los consolidados ingleses, quedaban 88 7/8 á 89.

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL

MADRID 6 DE MARZO DE 1865.

NUOVO PROGETTO DE LEY DE IMPRENTA.

Artículo 1.

La sustancia de este proyecto consiste en lo siguiente:

Dos horas antes de ponerse en circulación el impreso, se ha de entregar á la autoridad para que lo examine;

Si en el impreso se cometiere alguno de los delitos consignados en la ley, se considerará consumado el delito cuando se hubiesen repartido dos ó más ejemplares del impreso, ó cuando se le hubiese puesto en venta, fijado en un sitio ó dejado en un local ó establecimiento público, ó cuando se hubiesen remitido los ejemplares al correo;

Cuando no concurrieren estas circunstancias, se entenderá que el impreso no se ha publicado; y entonces si en él se hallare algo contrario á lo que la ley permite publicar, se considerará á sus responsables como reos de delito frustrado;

En uno y otro caso (el de delito consumado y el de delito frustrado) se juzgará y se penará á los reos conforme al Código penal vigente; es decir, el delito consumado como consumado, y el delito frustrado como frustrado.

Tal es, repetimos, la sustancia del proyecto;

porque estas disposiciones son las que le imprimen carácter, y en ellas hay que buscar el sistema á que se acomode.

¿Cuál es este sistema?—A tal pregunta no es posible responder sino suponiendo antes que lo absurdo pueda referirse á sistema alguno de los que puede concebir la mente humana. El rostro se nos enciende pensando en la idea que, á vista de ese engendro monstruoso de la demencia y de la injusticia, formará Europa entera del abismo á que han llegado en España la filosofía política y la jurisprudencia civil y criminal.

Procuren nuestros lectores representar en su imaginación la escena que diariamente se repetirá, de convertirse en ley ese proyecto, entre el periodista y el juez.

Con buena ó mala fe, escribe un periodista en su artículo algo que realmente es (ó que el juez cree ser) contrario á las prohibiciones de la ley. Cumpliendo fielmente lo prescrito en la misma, el periodista lleva su artículo al juez, y se abstiene de darle publicidad hasta que pasen las dos horas determinadas. Durante este tiempo, el juez ha comenzado á proceder criminalmente contra el periodista, y en su virtud manda prenderle y embargarle la imprenta y enseres de la redacción.

El Periodista. Pero, señor juez, ¿por qué hace Vd. esto conmigo?

El Juez. Porque ha cometido Vd. delito.

El Periodista. ¿Cuál?

El Juez. ¿Cómo cuál?—¿Pues no lo está usted viendo?—el de atacar aquí, tan claramente (por ejemplo) á la persona y dignidad del Rey.

El Periodista. Pues si Vd. lo cree así, yo me someto á su juicio: deme Vd. mi artículo, y me lo llevaré á casa para escribir otro en que no haya ese ataque.

El Juez. Yo no puedo hacer eso, porque la ley no me autoriza. Lo que la ley me manda es que, desde luego, por el mero hecho de haberme Vd. traído aquí este artículo, le declare yo criminal y le aplique la pena condigna.

El Periodista. Pero, señor juez, ¿quiere la ley que sea delito el mero hecho de haber yo escrito e impreso en mi casa ese artículo, ó quiere únicamente impedir que mi criminal disparete se haga público? Porque, si es lo primero, le diré á Vd. que de las culpas que yo cometa en mi casa y no cedan de hecho en perjuicio de nadie, no puede juzgar ninguna ley humana; y si es lo segundo, note Vd. señor juez, que mi artículo no ha sido publicado, y por consiguiente que no se ha cometido el delito que dice Vd. que hay en él.

El Juez. Cierzo: Vd. no ha consumado su delito; pero ha intentado cometerle; y yo, en virtud de la ley, voy á frustrarle la consumación del delito, y á castigarle como reo de tal delito frustrado.

El Periodista. Pero, señor juez, ¿y qué es un delito frustrado?

El Juez. Aquí lo tiene V. bien claro:—Código penal, libro I, tit. I, cap. 1, art. 3.º: «Hay delito frustrado cuando el culpable, á pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su mal propósito por causas independientes de su voluntad.»

El Periodista. ¿Eso es delito frustrado? Pues entonces, señor juez, yo no lo he cometido. En primer lugar, la prueba de que yo no he hecho cuanto estaba de mi parte para consumarlo, es que estando de mi parte el circular ese impreso sin tráserlo á Vd., he preferido ser sumiso á la ley trayéndoselo á Vd., y esperando á que pasen las dos horas que la ley me manda. En segundo lugar, note Vd. señor juez, que si yo en este caso no logro el mal propósito que dice Vd. que tengo, no es por causas independientes de mi voluntad; pues nadie me podría impedir que ahora mismo, mientras estamos en este diálogo, anduvieran mis repartidores distribuyendo casahita el periódico.

El Juez. Pero ¿me querrá Vd. decir que en punto á delitos cometidos por la imprenta, no se puede dar nunca el caso de delito frustrado?

El Periodista. Si, señor; se puede dar ese caso; por ejemplo: si el alguacil del juzgado de usted cogiese á uno de mis repartidores en el momento de ir á dejar el periódico en casa de cualquier suscriptor. Pero como ese caso, señor juez, no es el caso de ahora, porque yo estoy aquí esperando á que pasen las dos horas que dice la ley, no tiene Vd. derecho á suponer que yo he querido consumir el delito. Por consiguiente, no puede Vd. decir que me ha frustrado el delito, ni puede castigarle como á reo de delito frustrado, so pena de violar el sentido común, la justicia y el mismo artículo del Código penal que Vd. me ha citado.

El Juez. Pues bueno: ya que no quiere usted ser reo de delito frustrado, esperaré á que pasen las dos horas, y á que Vd. comience á repartir su periódico; y entonces le juzgaré como á reo de delito consumado.

El Periodista. Eso no lo puede V. hacer: primero, porque la ley le manda juzgarle como á reo de delito frustrado en cuanto V. halle que mi impreso es culpable; y segundo, porque V., señor juez, ni conforme á razón ni conforme á justicia, puede consentir que se consuma un delito que ha estado en su mano frustrar....

Basta de diálogo: con lo dicho sobra para demostrar que el proyecto del Sr. Gonzalez Brabo tiene de inicio tanto como de absurdo, y de anti-legal tanto como de insensato. No es solamente una estupidez; es además un oprobio; no es solamente una iniquidad; es además una locura. La conciencia y la razón se levantan indignadas contra un proyecto que crea delito donde no lo hay, y que después de crearlo, cierra todo camino para impedir que el juez aplicador de la ley pueda esquivar ni templar la injusticia y barbarie de la ley misma.

Esto último es evidente, pues al Juez no se le permite exhortar al periodista á que retire su artículo, sino que se le pone en la siguiente alternativa:

Ó persigue como delito frustrado, lo que ni segun la razón ni segun el Código penal, es tal delito frustrado;

Ó por huir de este absurdo, deja consumir el delito que ha podido frustrar;

Ó no hace nada, y entonces deja consumir un delito manifiesto, y queda la sociedad sin defensa.

Hay más. Eso que, segun el citado artículo del Código penal, no se puede castigar como delito frustrado, tampoco, segun el mismo artículo, se puede castigar ni aun como tentativa de delito; porque—«hay (dice) tentativa cuando el culpable da principio á la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, y no prosigue en ella por cualquiera causa ó accidente que no sea su propio y voluntario desistimiento.»

Conforme á estas palabras que dejamos subrayadas, es evidente que en cuanto el periodista desistiese por su propia voluntad de publicar el artículo, cesaría ipso facto su tentativa de delito, y por consiguiente, que tampoco se le podría juzgar como reo de tentativa.

Pero la ley es tan bárbaramente absurda, y tan absurdamente bárbara, que ni permite al periodista desistir, ni autoriza al juez á recibir su desistimiento. Nada: escribió el periodista un artículo criminal?—Pues por el solo hecho de haberlo escrito y de presentárselo impreso al juez, debe ser procesado y castigado.

El espíritu del Código penal, segun lo exponen y comentan sus mismos autores, es dejar al culpable camino siempre expedito para que renuncie á su mal propósito. Pero segun la ley del Sr. Gonzalez Brabo, lo primero que se hace es cerrar al culpable todo camino, é incitarle por consiguiente á consumir de cualquier manera un acto, cuya sola iniciación mental, desde el momento de ser consignada en letras de molde, le ha de llevar á la cárcel y á la ruina.

No: las Cortes del reino no pueden degradarse con tomar siquiera en consideración ese desatinado engendro por el vértigo de la más inconcebible ignorancia. Proyectos de esa especie no deben lograr el honor de una discusión: se los lee, y en seguida, sin otro preámbulo, se dice: no ha lugar á deliberar.

Sobre lo absurdo no se delibera.

GAVINO TEJADA.

Respecto á ese engendro que dejamos juzgado, nos ocurre que no ha podido ménos de ser presentado en el Consejo de ministros, y que en ese Consejo están el Sr. Arrazola, decano de la magistratura, y los jurisconsultos distinguidos Sres. Seijas y Benavides.

No sabemos qué hacernos de la reputación de sabios en jurisprudencia que gozan estos señores. Ellos sabrán el lugar en que queda su dignidad cuando hacen posible que un diario de esta corte publique el siguiente párrafo:

«Segun tenemos entendido, el proyecto de ley de imprenta presentado al Senado, encontraba gran oposición en los señores Arrazola y Benavides, y sólo haciendo su aprobación cuestión de Gabinete, es como ha podido conseguirse el Sr. Gonzalez Brabo.»

Si el hecho no es cierto, los señores Arrazola y Benavides han tragado sin protesta el engendro del Sr. Gonzalez Brabo; y si el hecho es cierto, queda probado que para deprimir á toda una nación dándole el espectáculo de un absurdo oficial, no hay cosa como que el inventor haga de su invento una *cuestión de Gabinete*.

Cuando en los Gabinetes se presenta esta clase de cuestiones, la primera cuestión es mirar por la dignidad del Gobierno.

Hé aquí el engendro del Sr. Gonzalez Brabo que ha sido presentado al Senado para ser discutido:

PROYECTO DE LEY, REMITIDO POR EL GOBIERNO DE SU MAJESTAD, SOBRE EL EJERCICIO DE LA IMPRENTA.

Alas Cortes.—La legislación de imprenta ha pasado por diversas vicisitudes desde que rige en España el sistema constitucional, y hasta ahora no ha sido posible fijarla de modo que deje satisfechas las necesidades que en el artículo de la Constitución relativo á este asunto y en la extensión á que han llegado los hábitos de libre controversia, se originan.

Siendo como es por extremo difícil el concertar la libertad de escribir con el deber de entor 6 reprimir las malas consecuencias que del abuso de la publicidad del pensamiento fácilmente sobrevienen, todos los Gobiernos y todos los partidos han hecho con la mejor fe ensayos más ó ménos afortunados para establecer lo mejor en tan importante materia.

El Gobie no ha estudiado con detenimiento así las disposiciones que en nuestro país han regido sobre imprenta, como las que han estado y están en vigor en otros pueblos, y por resultado de sus estudios encuentra que «lo hay tres sistemas que seguir con respecto á este trascendental asunto. El primero es el más sencillo que imaginarse puede: la previa censura de cuanto se imprime; por ella, asume el Gobierno la responsabilidad moral de cuanto se publique. Teniendo en su mano el sumo derecho á dar licencia para las publicaciones, claro es que en tal caso el único

mente sería culpable de las que fueran perjudiciales. Sólo con respecto á las clandestinas quedaría en cierto modo libre de esta responsabilidad.

Es el segundo el de adoptar, como hasta aquí se ha hecho, leyes, jurisdicción y procedimientos especiales que, por serlo, implican forzosamente un privilegio, ya favorable ya adverso para estos delitos; leyes cuya ineficacia para defender como es debido altas instituciones, y cuya injusticia en determinadas circunstancias nos ha enseñado la experiencia.

Por último, el tercer sistema es el de adoptar por base la libertad de usar de la imprenta como de cualquier otro mecanismo, y aplicar á los delitos que por ella se cometen penas proporcionadas en un sistema análogo al de las que imponen por las demás trasgresiones, que empleando otros medios que el de la imprenta, en daño de la sociedad ó de los particulares se ejecuten.

El primer sistema es abiertamente contrario al artículo 2.º de la Constitución, y por consiguiente de todo punto inadmisibles para un Gobierno que quiera conservar escrupulosamente los derechos que la ley fundamental concede.

El sistema de las leyes especiales está ya juzgado. En los años que llevamos de Gobierno representativo se han ensayado muchas leyes de imprenta de este género, y unas porque su aplicación ha sido desacertada, otras porque en sí mismas eran insuficientes, el hecho es que ninguna ha bastado á llenar el objeto para que fueron discutidas y promulgadas.

Prueba de esta verdad es la situación en que el Gobierno ha encontrado la cuestión de imprenta. Su respeto profundo á las disposiciones que los poderes públicos habían convertido en ley, le ha llevado hasta el punto de practicarlas moderadamente como deben practicarse las leyes para conocer sus resultados. Que estos han sido tan insuficientes como los ántes conseguidos, se demuestran con el estado actual de la prensa, cuya calificación queda á la conciencia de las gentes sensatas y juiciosas y de todos cuantos creen que hay principios é instituciones que deben estar al abrigo de toda discusión, instituciones y principios fundamentales que ha respetado siempre esta hidalga nación, y que constituyen por decirlo así la esencia misma, y hasta la ley necesaria de su ser social.

Semejante estado de cosas exige imperiosamente un remedio. El Gobierno al proponerlo ha creído que debía separarse de la ineficaz rutina hasta aquí observada, y adaptar al uso de la imprenta un sistema fundado en la libertad y en la igualdad ante la ley: un sistema que garantice el libre ejercicio del derecho de escribir, y que á la vez reprima suficientemente los delitos que abusando de él pueden cometerse.

Nada más legítimo que dar al uso de la prensa la libertad amplia que la Constitución establece; pero nada más justo y necesario que el definir en las leyes de que las mismas instituciones fundamentales tratan los límites de aquel derecho constitucional: nada es asimismo más justo que la aplicación á los delitos que se cometen por medio de la imprenta de un sistema de penas eficaces y de represiones análogas hasta donde sea posible á las que se imponen por el ejercicio abusivo de otros derechos no menos legítimos y sagrados que el concedido por el art. 2.º de la Constitución.

Un espíritu de rectitud y aun de favor para la prensa ha presidido en la redacción de este proyecto. Facilitar la emisión del pensamiento escrito, quitando trabas á su publicación; disminuir notablemente las condiciones que se exigen á los diarios políticos; allanar por esta manera el camino para que se discutan ampliamente los asuntos de interés público, no por agrupaciones privilegiadas de individuos, como ahora sucede, sino por el mayor número posible de personas, y hacer que sobre los delitos que puedan cometerse por medio de la imprenta fallen los mismos tribunales que entienden en la corrección y castigo de los demás delitos, son los puntos esenciales que han servido de base á la presente ley, con cuya aprobación, si la mereciese de las Cortes, se consignarán sin duda verdaderas garantías para la libertad de la prensa, dentro de la esfera que traza á todo Gobierno el deber en que está constituido de velar por los fundamentos de la sociedad, de cuya alta dirección está encargado.

Al someter este trabajo á la aprobación del Parlamento, prescinde el Gobierno de entrar en detalles que justifiquen su sistema. En la solemne discusión que acerca de él ha de abrirse en ambas Cámaras, darán cuantas explicaciones conducan á demostrar el espíritu filosófico, y por consiguiente racional y justo, de sus tendencias.

En resumen, la ley que se propone es pura y simplemente una aplicación de los principios generales de nuestro derecho penal y del fuero común. Esto le da quizá el carácter de un ensayo atrevido que rompe con hábitos y preocupaciones que han tenido hasta ahora fuerza grande, que aun la tienen, y que tal vez cueste gran trabajo destruir. El Gobierno cree llegado el tiempo de tratar esta cuestión á la luz de los principios que dominan cada día más enérgicamente en la civilización moderna. La imprenta es ya bastante fuerte para no vivir del privilegio favorable, y bastante poderosa para que sus efectos se contengan por la misma manera y dentro de los mismos límites en que se moderan y contienen todas las manifestaciones de la voluntad humana. Crear una teoría especial de esta voluntad para el uso de la libertad del pensamiento, á fin de establecer como consecuencia una legislación especial también para reprimir y castigar sus excesos, es á juicio del que suscribe una aberración doctrinal, cuyos peligros en vano pretenden encubrirse con la brillantez de las demostraciones de que se valieron los elucubradores de tal idea, y con el gran prestigio de sus nombres gloriosos. El tiempo ha corrido desde entonces sembrando tristes desengaños por encima de las impotentes aplicaciones de estas máximas, y la cuestión está en pie cada vez más amenazadora, cada vez más terrible.

No hay medio: ó la previa censura, es decir, la arbitrariedad, esto es, la supresión del derecho de escribir, para lo cual toda ley está demas; ó la libertad, es decir, la ley, esto es, el equilibrio, ó lo que es lo mismo, la compensación penal, el castigo eficaz y seguro de los delitos que se cometen.

El Gobierno de S. M., sometiéndose al espíritu y á la letra de nuestras instituciones políticas y civiles, opta por el segundo extremo, y el ministro que suscribe tiene por consiguiente el honor de proponer á la deliberación del Senado el adjunto.

PROYECTO DE LEY.

TÍTULO I.

DE LOS IMPRESOS.

Artículo 1.º Es impreso para los efectos de esta ley todo pensamiento manifestado con palabras fijadas sobre cualquier materia por medio de la imprenta, por los de la litografía y fotografía, ó por cualquier otro procedimiento.

Art. 2.º Los impresos se dividen en libros, folletos, periódicos, hojas sueltas y carteles.

Se entiende por libro todo impreso que sin ser periódico reúna en un sólo volumen 200 ó más páginas.

Por folleto, todo impreso que sin ser periódico reúna en un sólo volumen más de 25 páginas y menos de 200.

Por periódico, toda serie de impresos que salgan á luz una ó más veces diarias, ó por intervalos de tiempo que no excedan de sesenta días, con título constante ó variado, ó un título en cada uno de sus números ó entregas.

Es hoja suelta todo impreso que sin ser periódico tenga una ó más páginas, sin exceder de 25.

Es cartel todo impreso ó manuscrito destinado á fijarse en un paraje público.

Art. 3.º Son clandestinos:

Primero. Los impresos que procedan de una imprenta que no reúna las circunstancias prescritas en el art. 6.º del Real decreto de 2 de Abril de 1852.

Las litografías ó cualesquiera otros establecimientos de estampación serán considerados como imprentas para los efectos de esta ley.

Segundo. Los que no expresen el título legal del establecimiento en que hayan sido impresos, el nombre y apellido del impresor y el pueblo y año de la impresión.

Tercero. Los que se publiquen sin las formalidades que esta ley previene.

Cuarto. Los carteles que se fijen sin haber dado conocimiento de ellos á la autoridad.

Quinto. Los escritos sujetos á la autorización previa de la autoridad eclesiástica, que se den á luz sin este requisito.

TÍTULO II.

DE LA PUBLICACIÓN DE LOS IMPRESOS.

Art. 4.º No podrá publicarse impreso alguno sin dar conocimiento previo al gobernador de la provincia y al juez que deba conocer en los delitos de imprenta. El aviso se dará por escrito, firmándolo el editor, expresando el lugar de su naturaleza, su vecindad, residencia y las demás circunstancias que basten á determinar su identidad, y designándose el título que haya de llevar el impreso, el nombre del impresor y las señas de su establecimiento. Si la publicación hubiere de ser periódica, se expresará además el nombre del director de la misma y la casa en donde se establezca la redacción.

De toda alteración que posteriormente se haga en cualquiera de estas circunstancias, se dará también conocimiento oportunamente á las dos autoridades mencionadas.

Art. 5.º Dos horas ántes de ponerse en circulación cualquier impreso se entregarán dos ejemplares en el gobierno de la provincia, si se publicase en la capital de ella, ó en la alcaldía del pueblo si no fuese capital, y otros dos en el domicilio del juez de primera instancia de imprenta ó en el del juzgado ordinario respectivamente. El gobernador ó la persona en quien al efecto delegase este su facultad, y el juez de primera instancia de imprenta donde le hubiere, estamparán el sello del gobierno y el del juzgado en un recibo que se entregará al que presentase el impreso, expresando la hora en que se hiciere la entrega. En los ejemplares que quedaren en poder de estas autoridades se expresará también la hora del recibo de los mismos.

En cada edición de un mismo impreso deberán cumplirse estas formalidades.

Art. 6.º Si en algún impreso se dejaren blancos para ser cubiertos en pueblos distintos de aquel en que se publicase su primera edición, lo que se imprimiere en dichos blancos se considerará como un impreso nuevo, y sujeto por consiguiente á las prescripciones establecidas para la publicación de todo impreso.

TÍTULO III.

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS IMPRESOS.

Art. 7.º Para los efectos de esta ley son solidariamente responsables del impreso el autor, el editor y el impresor del escrito, y si este fuere periódico, lo será en vez del editor el director.

La imprenta, sus enses y efectos y los de la redacción en los periódicos quedarán especialmente afectos con preferencia á todo otro acreedor, sea cualquiera su título, á las responsabilidades judiciales ó gubernativas que emanen de abusos en los impresos, observándose en todo lo demás que no se oponga á esta ley y sea aplicable á los delitos y faltas que son objeto de la misma, lo que respecto á las responsabilidades civiles y pecuniarias se establece en el libro primero, capítulo 2.º, título II, en la sección segunda del título III, artículos 46 y siguientes, y en el título IV del código penal.

Si el dueño del establecimiento en que se hiciere la impresión se incapacitase por cualquier causa, se suspenderá la publicación hasta que se cumpla con lo prescrito en el art. 8.º

Art. 8.º Se tendrá por autor de un impreso á la persona á quien legalmente se probare haber producido el original que haya servido para la impresión. Las traducciones serán consideradas como producciones originales.

Será director el que resultare legalmente haber dispuesto la publicación en los impresos periódicos.

Será editor el que resultare legalmente haber costado y dispuesto la publicación de impresos no periódicos.

Será impresor el dueño de un establecimiento que reuniera las condiciones expresadas en el art. 3.º

Art. 9.º En los impresos clandestinos se considerarán como autores de los delitos que en ellos se cometieren, los que resultaren ser autor, editor ó impresor, y todos los que de cualquier modo hubiesen contribuido á la publicación y circulación del impreso.

TÍTULO IV.

DE LOS DELITOS.

Art. 10. Se considerará consumado el delito por medio de la imprenta cuando el impreso se haya publicado.

Si no llegare á publicarse y se hubiesen entregado los ejemplares de que trata el art. 3.º, y en ellos se cometiere alguno de los delitos que esta ley define y castiga, se considerará á los responsables como reos de delito frustrado.

Se entiende que habrá publicación cuando se hubieren repartido dos ó más ejemplares de un impreso: cuando se hubiese puesto en venta, fijado en un sitio ó dejado en un local ó establecimiento público, ó cuando se hubiesen remitido los ejemplares al correo.

Art. 11. Se pueden cometer delitos por medio de la imprenta:

Primero. Contra la persona ó dignidad del Rey.

Segundo. Contra la seguridad del Estado.

Tercero. Contra el orden público.

Cuarto. Contra la sociedad.

Quinto. Contra la moral pública.

Sexto. Contra los Soberanos extranjeros.

Sétimo. Contra los particulares.

Art. 12. Se comete delito contra la persona ó dignidad del Rey:

Primero. En los escritos que atacaren, ofendieren á deprimir la sagrada persona del Rey, su dignidad, sus derechos ó sus prerogativas, sea cual fuere la forma en que esto se haga, ya directa, ya indirectamente ó por medio de alusiones.

Segundo. En los que atacaren, ofendieren ó deprimir en algún modo ó de cualquier forma directa ó indirectamente, ó por medio de alusiones, las personas, la dignidad ó los derechos de todos ó de algunos de los individuos de la Real familia.

Art. 13. Delinquirán contra la seguridad del Estado:

Primero. Los escritos que atacaren la Constitución del Estado, los que provocaren directamente á destruir ó á establecer otra clase de Gobierno, aunque sea temporal, que el prescrito en la ley fundamental de la monarquía; los que tendieren á impedir que se reúnan las Cortes, á hacer que se disuelvan ilegalmente, ó á la reunión de asambleas, de cualquier duración, carácter y título, que se propongan ejercer las facultades de las Cortes ó las prerogativas de la Corona.

Segundo. Los que atacaren la legitimidad de los Cuerpos colegisladores, se dirijieren á coartar su libertad ó á la de sus individuos, ó á deprimir su dignidad y prestigio.

Tercero. Los que atacaren ó ridiculizaren la Religión católica apostólica romana y su culto, ofendieren el sagrado carácter de sus ministros, excitaren á la abolición ó cambio de la misma Religión, ó á que se permita el culto de cualquiera otra.

Cuarto. Los que se propusieren por objeto relajar la disciplina ó la fidelidad de nuestras tropas.

Art. 14. Delinquirán contra el orden público:

Primero. Los que publicaren máximas ó doctrinas dirigidas á turbar la tranquilidad del Estado.

Segundo. Los que publicaren, aunque sea en forma dubitativa, noticias falsas de las que pueda resultar algún peligro ó daño á los intereses ó al crédito del Estado.

Tercero. Los que incitaren á la desobediencia de las leyes y autoridades constituidas.

Cuarto. Los que tuvieran por objeto promover ó avivar rivalidades entre cuerpos ó clases del Estado.

Art. 15. Delinquirán contra la sociedad:

Primero. Los escritos en que se hiciere la apología de acciones calificadas por la ley como criminales.

Segundo. Los dirigidos á propagar doctrinas contrarias al derecho de propiedad, ó á precuar el despojo de unas clases por otras.

Art. 16. Delinquirán contra la moral pública:

Primero. Los que publicaren impresos en que se tratase de asuntos religiosos sin la correspondiente autorización, cuando esta sea necesaria según las leyes del reino.

Segundo. Los que publicaren escritos contrarios á la moral, á las buenas costumbres y á la decencia.

Tercero. Los que publicaren impresos clandestinos.

Art. 17. Delinquirán contra los Soberanos extranjeros:

Primero. Los que injuriaren á las personas de los Monarcas ó jefes superiores de otros Estados, sus embajadores ó agentes diplomáticos.

Segundo. Los que en tiempo de paz excitaren á la rebelión á los súbditos de otros Estados.

Art. 18. Se delinquirá contra particulares:

Primero. Cuando se los calumniare ó injuriare, ya manifestamente, ya por medio de alegorías, caricaturas, emblemas ó alusiones.

Segundo. Cuando se publicaren sucesos, asuntos ó documentos privados de las familias ó de las personas, ó se aludiese á ellos, no teniendo previa autorización escrita de los interesados.

Art. 19. En todos estos delitos se considerará como circunstancia atenuante la de que se cometan en libros, y como circunstancia agravante la de que se perpetren en periódicos.

Art. 20. No se cometerá delito:

Primero. En los escritos en que se publicare ó censurase la conducta oficial ó los actos de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, siempre que la imputación no fuere calumniosa.

Segundo. En los escritos en que se revelare alguna conspiración contra la seguridad del Estado ó cualquier atentado contra el orden público.

En este último caso, los responsables del escrito estarán obligados á probar la certeza de sus asertos.

TÍTULO V.

DE LAS PENAS.

Art. 21. Los delitos cometidos por medio de la imprenta contra la persona ó dignidad del Rey y contra la seguridad del Estado, que se comprenden en los artículos 12 y 13 de esta ley, se castigarán con la pena de prisión menor (de cuatro á seis años) y multa de 12,000 á 36,000 rs.

Cuando estos delitos se frustraren, se castigarán con prisión correccional (de siete á treinta y seis meses).

Los cometidos contra el orden público y contra la sociedad, comprendidos en los artículos 14 y 15, se castigarán con la pena de prisión correccional (de siete á treinta y seis meses) y una multa de 10,000 á 30,000 reales.

Cuando se frustrasen estos delitos, se castigarán con arresto mayor (de uno á seis meses).

Los delitos contra la moral pública comprendidos en el art. 16, se castigarán con la pena de arresto mayor (de uno á seis meses) á prisión correccional (siete á treinta y seis meses) y una multa de 5,000 á 10,000 rs.

Si estos delitos fueran frustrados, se castigarán con dos meses de arresto.

Cuando por el escrito clandestino se cometiere delito al que la ley imponga pena más grave que esta, la circunstancia de la clandestinidad se considerará como agravante para la imposición del máximo de la pena señalada al delito.

Los delitos contra Soberanos extranjeros, comprendidos en el art. 17, se castigarán con la pena de arresto mayor (de uno á seis meses) y una multa de 4,000 á 8,000 rs.

Si se frustrasen estos delitos, se castigarán con arresto menor (de uno á quince días).

Los delitos contra particulares comprendidos en el párrafo primero del art. 13, se castigarán con la pena de arresto mayor, (de uno á seis meses) á prisión correccional (siete á treinta y seis meses) y multa de 2,000 á 20,000 reales.

Los comprendidos en el párrafo segundo del artículo 18 se castigarán con la pena de arresto mayor (de uno á seis meses) y con una multa de 1,000 á 10,000 rs.

Los ofendidos por estos delitos podrán además ejercitar la acción de indemnización de daños y perjuicios con arreglo á las prescripciones del Código penal.

No podrá concederse indulto por los mencionados delitos, sin que otorguen ántes su perdón por escrito las personas ofendidas.

Frustrados estos delitos, se castigarán con una multa de 200 á 500 rs.

Art. 22. La prescripción de las penas tendrá lugar en las aflictivas á los quince años, en las correccionales á los diez, y en las leves á los cinco, principiando el término de la prescripción desde que se notificare la sentencia que cause la ejecución en que la misma pena se imponga.

Para que tengalugar la prescripción, es preciso que el sentenciado no haya, durante el término de ella, cometido delito, ni ausentándose de la Península é islas adyacentes.

Las penas meramente pecuniarias prescribirán á los dos años.

TÍTULO VI.

DE LOS TRIBUNALES DE IMPRENTA.

Art. 23. Mientras en el fuero común conozca en primera instancia de las causas criminales un solo juez, habrá en Madrid, Barcelona y Sevilla uno especial, ó más si fueren necesarios, para los delitos de imprenta con las mismas condiciones que los demás ordinarios. En las otras poblaciones conocerán los jueces de primera instancia del fuero común, y el más antiguo cuando haya dos ó más en una localidad.

Si la ley estableciere para las primeras instancias en las causas criminales por delitos comunes tribunales colegiados, el Gobierno dictará las disposiciones convenientes para atemperar á ella la instrucción y fallo de estos procesos en el espíritu de esta ley.

El ministerio fiscal se organizará de la manera que sea conveniente para atender á las necesidades del servicio en estos procesos.

TÍTULO VII.

DEL PROCEDIMIENTO EN LOS DELITOS DE IMPRENTA.

Art. 24. El juez de primera instancia encargado de la persecución de los delitos cometidos por medio de la imprenta, procederá de la propia manera bajo la misma responsabilidad que en todos los demás delitos comunes. Podrá darse principio al procedimiento cuando así lo determine el juez, después de haber recibido los dos ejemplares del impreso de que trata el art. 5.º

De los fallos del juez se puede apelar ante la audiencia del territorio, y usar de todos los recursos que la legislación común autoriza en los demás juicios criminales.

TÍTULO VIII.

DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL CONTRA LOS DELITOS DEFINIDOS EN ESTA LEY.

Art. 25. En los delitos que son objeto de esta ley, la acción penal prescribe por sesenta días, cuando dichos delitos hubieren sido cometidos en un periódico, por noventa cuando se hubieren cometido en un folleto, y por ciento veinte cuando se hubieren cometido en un libro.

Por los delitos de injuria y calumnia la acción penal prescribirá en el término de tres meses cuando los injuriados ó calumniados residieren en la Península é islas adyacentes.

Los términos expresados principián á correr desde el día de la publicación del impreso.

Art. 26. Si el interesado residiere en las Antillas ó Filipinas, la prescripción será por seis meses y un año respectivamente.

TÍTULO IX.

DE LAS FALTAS EN MATERIA DE IMPRENTA, SU CORRECCIÓN, Y AUTORIDADES QUE HAN DE IMPOSERLAS.

Art. 27. Se cometerá falta:

Primero. Publicando en un impreso periódico hechos falsos ó desfigurados respecto á personas, tribunales, corporaciones ó asociaciones autorizadas por la ley. En este caso estará obligado el periódico á insertar en uno de sus números y dentro de tres días las rectificaciones que en término conveniente se le dirigieren.

Estas rectificaciones deberán insertarse en la misma plana y carácter de letra que el párrafo ó párrafos á que se refiriesen, y serán gratuitas si no excedieren del triple de impresión.

En el caso de muerte ó ausencia de la persona agraviada, tendrán igual derecho sus hijos, padres, cónyuge, hermanos y herederos.

Segundo. No citando en el impreso la calle y número de la casa en que está establecida la imprenta.

Tercero. Distribuyendo ántes de entregar á las autoridades los ejemplares que esta ley previene.

Cuarto. Tratando de asuntos religiosos sin la autorización competente.

Quinto. Publicando un periódico sin haber cumplido las formalidades que esta ley exige.

Sexto. No publicando un periódico en el término debido las rectificaciones de que trata el párrafo primero de este artículo.

Sétimo. Cuando se tratase de hacer ilusoria por cualquier medio la responsabilidad de las personas que verdaderamente incurrieren en ella, según esta ley, por los delitos cometidos por medio de la imprenta.

Art. 28. La responsabilidad de las faltas se exigirá de las mismas personas que la de los delitos.

Art. 29. La corrección de las faltas será impuesta á los responsables de ellas por el gobernador, ó por el alcalde si la falta se cometiere en pueblo que no sea capital de provincia. La corrección de las faltas comprendidas en los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y sétimo, consistirá en una multa de 200 á 4,000 rs.

Cuando la multa fuere impuesta por un alcalde y pasare de 500 rs., el interesado podrá reclamar al gobernador, cuyo fallo será inapelable.

Cuando la impusiere el gobernador y pasare de 3,000, el interesado podrá reclamar al ministro de la Gobernación, y de su resolución no habrá ulterior recurso.

En ambos casos la reclamación habrá de hacerse dentro de los cuatro días siguientes á la imposición de la multa.

Art. 30. La acción de la autoridad y la de los particulares contra las faltas espirará á los quince días de haberlas cometido.

Art. 31. El castigo de estas faltas no impedirá la persecución de los delitos que contuvieren los impresos.

TÍTULO X.

DE LAS LITOGRAFÍAS, GRABADOS Y CARTELES.

Art. 32. No podrán anunciarse, exhibirse, venderse ó publicarse dibujos, estampaciones litográficas, fotográficas, grabados, estampas, medallas, viñetas, emblemas, ni otra alguna producción de la misma índole, ya aparezcan solas ó ya en el cuerpo de algún impreso, sin pasar dos ejemplares al juez de primera instancia de imprenta y otros dos al gobernador civil, si el lugar en que se hubieren de publicar fuere capital de provincia, y si no fuere capital, á la autoridad local del pueblo en que se hubiere de hacer la publicación.

Se exceptúan de esta disposición los retratos, vistas de ciudades, paisajes y monumentos. Si alguna de estas clases de producciones contuviere detalles opuestos á la decencia, se castigará este delito como contrario á la moral pública con arreglo al art. 21 de esta ley.

Art. 33. Ningún cartel manuscrito, impreso, litografiado ó reproducido bajo cualquier otra forma, podrá fijarse en los parajes públicos sin previo permiso del gobernador de la provincia ó de la autoridad local donde el gobernador no residiera, para lo cual se entregarán á dos horas de antelación dos ejemplares y otros dos al juez de primera instancia de imprenta ó al que hiciere sus veces.

Los escritos, grabados y los litografiados ó autografiados, quedarán sujetos á las disposiciones establecidas en esta ley para los impresos.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 34. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables á los escritos oficiales de las autoridades. Estos quedarán sujetos á las que tratan de la responsabilidad de los empleados.

Tampoco se aplicarán á la Gaceta de Madrid ni á los documentos que el Gobierno ó las autoridades publicaren.

Art. 35. Cuando el responsable de una multa fuere insolvente, sufrirá la prisión que corresponda con arreglo al Código penal.

Art. 36. Queda subsistente el previo examen de las obras dramáticas, novelas, hojas sueltas, romances, canciones, trovas, motes, ó otras publicaciones análogas, impresas ó manuscritas.

Cuando alguno de los citados escritos se refiriese á dogma ó moral cristiana, el juez exigirá para permitir la publicación la autorización eclesiástica.

Art. 37. El ministro de la Gobernación dictará los reglamentos que juzgare convenientes relativos á la policía de los ramos de imprenta, librería, anuncios, venta y distribución de impresos; y el de Gracia y Justicia por lo que depende de su ministerio, dará las órdenes que estimare necesarias para el mejor cumplimiento de esta ley.

Art. 38. Quedan derogadas todas las leyes, reglamentos y disposiciones que se opongan á lo prescrito en la presente ley.

Madrid 28 de Febrero de 1865.—El ministro de la Gobernación, Luis González Brabo.

Si sabe *La Democracia* que la independencia de la Iglesia, según nosotros, es una cosa enteramente distinta de lo que el liberalismo

Dica La Correspondencia:

«En el Consejo de ministros de hoy ha quedado acordada la resolución del Gobierno sobre la Enciclopedia. Mañana será sometida a la firma de S. M. Sobre tal resolución no podemos decir más sino que no es cierto lo que ayer dijo un periódico y hoy repetidos de que la Enciclopedia se publicará en la Gaceta, marcándose en el a lo que los Obispos y periódicos deben abstenerse de publicar, y concediendo el *regium exequatur* a los demás puntos sobre que versa.»

Suponemos que La Correspondencia lo que quiere dar a entender en el anterior párrafo, es que desmiente a Las Noticias, es algo parecido a lo que dice La Libertad en las siguientes líneas:

«Se cree que el Consejo de ministros opina que la Enciclopedia, como predicción doctrinal, no era rigurosamente hablando, objeto de pase; y que de serlo, por considerarla Breve ó despacho de la Santa Sede, no podía negarse ni en todo ni en parte, por más que al otorgarlo se hicieran las salvedades de costumbre á favor de las regalías de la Corona y de los derechos concordados.»

Para nosotros es lo mismo. Como ni el Gobierno ni el Consejo de Estado, ni todos los Consejos juntos mandan en nuestras opiniones, lo mismo nos importa el Placet que el non Placet. Nosotros la hemos de creer aunque el Gobierno y todos los Gobiernos de la tierra nos prohibieran creer en ella.

Insertamos á continuación el comunicado que D. Eusebio Salazar y Mazarredo nos ha dirigido. Es muy digna de ser tenida en cuenta la relación que en él hace el Sr. Salazar de sus gestiones como representante de España en el Perú, cuando nuestra escuadra se apoderó de las islas Chinchas, no á título de reivindicación, según afirma con notoria inexactitud el convenio preliminar de la paz, sino en ley de justas represalias por el desaire que el Gobierno de Lima había hecho á nuestro pabellón y á nuestro comisario especial. Véase el comunicado á que hacemos referencia:

Señores redactores de EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

Hace diez meses que estoy siendo objeto de censuras injustas por mi conducta en el Perú, y por haber empleado la palabra reivindicación en el documento que dió á conocer las razones que tuvieron los agentes de España en el Pacífico para apoderarse de las islas de Chinchas.

He guardado silencio, porque mi personalidad desaparece ante altísimas consideraciones nacionales, porque la prudencia y la sabiduría deben ser los caracteres distintivos de todo hombre público, y porque la causa era tan buena, que el tiempo sería nuestro más elocuente defensor.

No habría tal vez tomado la pluma aun después de terminado el conflicto, dejando á la opinión que dedujese las consecuencias que se desprenden de los hechos, si el señor general Pareja no hubiera estampado en el artículo primero del convenio que ha firmado con el Perú, una aseveración equivocada.

Dice el general plenipotenciario que el Gobierno de S. M. ha desaprobado que sus agentes tomasen las islas de Chinchas á título de reivindicación.

Ni el Sr. Pacheco, ni el Sr. Llorente han dicho nunca que nos apoderamos de aquellas islas en el concepto indicado: el primero desaprobó el uso de la palabra, y el segundo, que era todavía ministro cuando fué nombrado el Sr. Pareja, pidió aquella calificación al recordarla diciendo lo que es cierto, que la usamos como uno de tantos argumentos que justificaban nuestro proceder.

El 14 de Abril de 1864 publicamos el general Pinzon y yo una declaración, que terminaba con el acuerdo de tomar las islas, respetando los contratos extranjeros, según los cuales se exportaba el guano durante cuatro años á casi todas las naciones del globo. España, China y Chile reciben aquel abono de compañías peruanas, que como las otras beneficien un tanto por ciento de comisión por el número de toneladas que extraen en el tiempo convenido. El valor intrínseco del guano que debe explotarse, descontando aquella comisión, se paga en Lima por los contratistas, parte al firmarse el convenio, y el resto en varios plazos.

La declaración decía así:

«Los infrascriptos, comisario especial extraordinario de S. M. católica en el Perú y comandante general de su escuadra del Pacífico:

«Ha atención á que las razones expuestas en el memorándum dirigido el 12 de este mes á los representantes de las naciones aliadas en Lima, demuestran de un modo evidente que el Gobierno de la República peruana se ha colocado en una actitud que hace indispensable el empleo de la fuerza;

«Considerando que la política de conciliación seguida hasta el día, sólo ha servido para que el Gobierno de un país que tiene con España obligaciones sagradas, las olvide, creyendo que la moderación significa impotencia;

«Considerando que el Gobierno de S. M. católica no ha reconocido la independencia del Perú por culpa del de la República; y que según la expresión de uno de sus publicistas, la trágica continúa sólo de hecho;

«Considerando que el bombardeo de uno ó dos puertos serviría tan sólo para derramar sangre inútilmente y para destruir la propiedad de súbditos de las naciones aliadas, y tal vez la de peruanos que censuran la conducta de su gobierno;

«Considerando que el Sr. S. M. no pretende nunca mezclarse en la política interior de las Repúblicas hispano-americanas, y que para demostrar la sinceridad de sus deseos ha evitado en cuanto le ha sido posible hacer ningún desembarco en la tierra firme;

«Considerando que el Gobierno del Perú ha declarado además en un documento diplomático dirigido al de la Gran-Bretaña, que las islas de guano no son sino una *factoría*, un establecimiento rentístico del Gobierno, y que por esa razón no podía admitirse en ellas consules ni agentes consulares;

«Considerando que la propiedad de las mencionadas islas *puede* reivindicarse por el Gobierno de su majestad con un derecho semejante al que la Gran-Bretaña sancionó devolviendo las de Fernando Póo, Anobon y Corisco, después de una ocupación formal, y no interrumpida durante un número considerable de años;

«Considerando que según una manifestación que acaba de hacerse en la comisión permanente del Congreso peruano, el Gobierno ha enviado al extranjero comisionados que deben contratar un empréstito de 70 millones de pesos, cantidad excesivamente superior á las atenciones del Tesoro;

«Considerando que según la opinión pública, parte de ese capital se destinará á adquirir los medios de oponerse á las justas exigencias de España, y que los obstáculos puestos al recibimiento del infrascripto comisario especial, tienen por objeto ganar el tiempo suficiente para terminar aquella operación rentística;

(El *Memorandum* á que alude la declaración anterior, es un documento inseparable de ella. En él, después de referir los graves motivos de que España tenía contra el Perú, desenvolvió en los siguientes términos, la política del Gobierno de S. M. en América.)

«El Gobierno peruano puede vivir tranquilo. España no pretende renovar esos 300 años de su dominación que los oradores y escritores del Perú se complacen en llamar tres siglos de vergonzosa esclavitud, sostenida por tigres sedientos de sangre.

«No lo pretende, porque América fué la principal causa de su decadencia; y sólo vuelve á ser grande desde que reconcentra en sí misma todas las fuerzas de que dispone, se dedica con fruto á desarrollar los grandes elementos de prosperidad que encierra su privilegiado suelo.

«América privó á España de libertad de población, de industria y de agricultura. El glorioso descubrimiento de Colón le arrebató una generación de gigantes, coetáneos de los hombres de 1521, que hubiera consolidado el sistema constitucional más antiguo de toda Europa. Sin la América, tendría ahora la Península ibérica 40.000.000 de habitantes, tesoro mil veces más valioso que todos los metales de Méjico y el Perú, y la brillante juventud hispano-americana coadyuvaría hoy con la española á la regeneración de una misma patria.

«España reconocerá la independencia del Perú y de todas las naciones de este continente, porque ni anda en sed de venganza ni aspira, como lo ha probado en Méjico, á establecer en América dinastías europeas. Si una nación tan noble abrigara tan mezquino sentimiento, el parangón del espectáculo que han ofrecido algunas repúblicas con el estado de la feliz Antilla, miserable ayer, hoy de más precio que los antiguos vireinatos, sería para ella satisfacción cumplida. Pero es menguado quien del daño ajeno toma placer propio, y la España moderna saldrá con júbilo la aurora del día en que pueda esglamar, imitando á las máximas del Evangelio: «*Essos frutos son también el testigo de mi vida.*»

El 14 de Abril manifestamos también al Gobierno peruano, que su conducta nos había obligado á tomar las islas de Chinchas hasta que el Sr. S. M. resolviese: el 21 de Abril y el 5 de Mayo repetimos lo mismo al Gabinete de Lima y al cuerpo diplomático extranjero, insistiendo siempre, y citando á mayor abundamiento el texto de Vattel sobre *represalias*, en que nos habíamos apoderado de aquellas islas, con el objeto de evitar efusión de sangre y de hacer así más fácil un arreglo, reemplazando por este medio coercitivo los que nos señalaban las instrucciones; en la confianza de que los perjuicios materiales obligarían, por último, al Perú á oír la voz de la razón.

«No ha sido un gran triunfo digno de la civilización moderna y de la España, terminar un grave conflicto sin derramar una sola gota de sangre? ¿Qué se habría dicho si pudiendo apoderarnos de la única riqueza del Perú (su presupuesto asciende á 20 millones de pesos, y el guano da 17) hubiéramos repetido en el continente descubierto por la piedad de Isabel a Católica, el incendio de Sinope y el bombardeo de Nicaragua? ¿Cuán grave no habría sido nuestra responsabilidad, si dejándonos adormecer por las artes peruanas, hubiéramos dado tiempo á que contratasen el anunciado empréstito? Bombardando el Callao y destruyendo su rica escuadra, no lo evitábamos, y nos exponíamos á complicaciones exteriores, pues casi toda la propiedad de aquel puerto es extranjera, y ajustada la paz, hubiéramos tenido que pagar unos buques que ningún daño podían hacernos.

El Perú había rechazado el tratado hecho con España. Apelamos á la mediación francesa y la rechazó también, enviando un ministro á Madrid que pretendió humillar á nuestra Soberana con la exigencia de ser recibido antes de firmarse de nuevo el tratado que reconocía su independencia. Fué á Lima el Sr. Tavira y su misión no tuvo éxito. Pedimos de nuevo los buenos oficios de la Francia, y tampoco fueron aceptados bajo el pretexto de que se desaba negociar directamente con España. Voy yo á Lima, y no soy admitido. ¿Qué significaba esa política? ¿No era el desprecio más absoluto de la antigua metrópoli?

Ante conducta semejante, ante exigencias tan injustificadas, no creí que debíamos consentir nuevas injusticias ni renunciar á hacer mención del derecho de España en la forma expresada. Recordaba que todas las Repúblicas de América habían aceptado en sus tratados un art. 1.º que decía así: «Su majestad católica renuncia por sí y sus sucesores la soberanía, derechos y acciones que le corresponden sobre el territorio, etc.»

En virtud de esa renuncia recibamos ventajas positivas; luego no era ilusoria.

¿Qué queda por lo tanto de la tan debatida palabra reivindicación? Absolutamente nada. El derecho para usarla era perfecto, y la empleé tan sólo como un argumento que legitimaba más y más nuestra conducta. No dije que España reivindicaría, sino que el derecho para hacerlo no había caducado, y en el *Memorandum* completaba el pensamiento, exponiendo que la política española era política de justicia y no de conquistas.

Leamos de nuevo esos documentos, y díjase imparcialmente si hay en ellos nada que confirme las acusaciones de que han sido objeto: en el primero, los argumentos principales no son los que se fundan en el derecho de reivindicación: este derecho campea como hipótesis y como amenaza, y en el segundo se desvirtúan por completo los recelos que pudiera inspirar.

La invocación del derecho de España fué por otra parte consecuencia de la situación singular en que me colocó respecto del Perú una circunstancia que saben los hombres políticos de Madrid, aunque se ignoran los detalles.

Al llegar á Lima supe con asombro ser allí público y notorio que mis instrucciones eran un papel mojado; el gobierno del Perú las conocía. Fué preciso obrar y obrar sin dilación y sin contemplaciones, á fin de desbaratar los planes del adversario, y cuanto más enérgica sea una determinación, tanto más debe legitimarse. Variamos la forma de la agresión, porque así convenía á España, y al variarla, creí yo, apoyado en publicistas respetables, que no mencionando siquiera el derecho que conservábamos por culpa del Perú, puesto que la república no había ratificado el tratado que reconocía su independencia, nos exponíamos á que se tachase de acto pirático la toma de las islas de Chinchas.

La alarma que produjo la palabra reivindicación fué ficticia, y las pruebas no pueden ser más elocuentes. El Gobierno peruano tardó en publicar mi *Memorandum*, á pesar de que iba unido á la declaración, porque así convenía á sus intereses: pero en cuanto se conocieron todos los documentos cambió el pretexto de queja. En efecto, desaprobó el Sr. Pacheco el 24 de Junio la palabra reivindicación, absolvió al Gobierno de Lima de toda complicación en los sucesos de Talambó, origen de mi misión, reconoció la independencia del Perú; hizo más; declaró que las islas no nos pertenecían bajo ningún concepto: ¿Qué acogida tuvieron esas concesiones?

El Gobierno de Lima contestó que lo que pedía el Sr. D. Joaquín Francisco Pacheco era un insulto mayor que el atentado del día 14 de Abril (nota de don Toribio Pacheco); el Congreso peruano nos declaró la guerra el 9 de Setiembre, y Chile nos negó viveres y carbón.

Ahora ceden, á pesar de sus decantados costismos y ridículos armamentos, porque en América, hasta el día, no ha habido contra España más que una sola fuerza; la exageración de nuestra debilidad.

Expuestos estos hechos, que son concluyentes, porque como dicen los franceses, *il n'y a rien de brutal comme un fait*, ¿qué necesidad tenía el Sr. Pareja de humillarnos al general Pinzon y á mí, estampando en un tratado *puesto después á que pedimos* esas condiciones, lo que el mismo Gobierno español no había dicho al dirigirse en dos circulares distintas á los agentes que le representaban en el extranjero?

¿Quiero significar el art. 1.º del nuevo convenio, que el Perú toma la frase del Sr. Pareja como una satisfacción que da España á aquella república?

En tal caso no podríamos recibir decientemente 60 millones de reales en cambio de esa interpretación, no siendo exacto que tomásemos las islas á título reivindicatorio.

¿Significa únicamente la forma adoptada por los plenipotenciarios, que el Gobierno de Lima se dá por satisfecho con que se vitupere á dos humildes personas? Pues entonces, tal vez nos enaltece. Esta versión debe ser la verdadera, porque, circunstancia notable, aquel Gobierno no ha querido entenderse en dos meses con el general Pareja, empleando siempre su

tradicional política de ganar tiempo, hasta que llegó el término fatal de 25 de Enero. Ese día terminaban todas las concesiones extranjeras para la exportación del guano (menos una); es decir, que desde aquella fecha necesitaba, para adquirir recursos, recuperar su única riqueza. ¿Quiénes se la embargaron, poniendo el dedo en la laga? ¿Quiénes impidieron la contratación del codiciado empréstito que ahora realizarán fácilmente?

¿Quiénes vengaron en el Callao con una sola goleta la vergüenza de Ayacucho?

Ambos actos son hijos del mismo pensamiento, restaurar el prestigio de nuestra bandera y asegurar los intereses españoles.

Si lo que el Perú ha pretendido es tomar satisfacción de dos personas aisladas, sería digna de las gentes que promovieron contra una de ellas, indefensa, los sucesos del vapor *Talia* y del istmo de Panamá.

Esta no es cuestión de amor propio, y apelo á la conciencia pública. No es fácil concebir que queden lastimados gratuitamente los agentes españoles, sin que hasta cierto punto quede también rebajada la nación que han representado.

El art. 1.º del tratado del Sr. Pareja empieza así: «Habiendo desaprobado el Gobierno de S. M. católica la conducta de sus agentes en el litoral del Perú, tomando posesión de las islas Chinchas á título de reivindicación...»

Si se trataba de salvar la susceptibilidad del Perú, y no parecía conveniente la fórmula aceptada por todas las demás Repúblicas que he citado más arriba, cien otras podrían haberse imaginado. La primera que se me ocurre es la siguiente:

«Habiendo el Gobierno de S. M. católica demostrado, por medio de actos repetidos, que lejos de querer vengar á la independencia de la República peruana, desea entablar con ella relaciones de paz y amistad...»

El tratado ha sido firmado *ad referendum*, y el Gobierno de S. M. tiene todavía dos meses para ratificarlo.

El asunto es bastante grave para que se ocupe de él con preferencia.

¿Qué cuestión tan fértil en soluciones! ¿Qué base de negociación! No hay ejemplo en los anales del mundo, de que los agentes de una nación puedan decir á su Reina:

«Señora, ponemos á los pies de V. M., con derecho indisputable, un tesoro cuyo valor se aproxima al de toda la deuda nacional, encerrado en una extensión poco mayor que el recinto de nuestro palacio.»

Podíamos haber hecho un servicio inmenso á la agricultura, atrayéndonos las simpatías del orbe entero, rebajando el precio del guano, rebaja que habría sido despreciable.

Francamente habiendo las bases de tratados de propiedad literaria, de comercio y de deserción de marineros, que aquellas Repúblicas no han querido aceptar, Podíamos.

Voy á terminar: la política que hemos seguido es la verdadera política de la civilización moderna; con tener al adversario sin lastimar al inocente, bien fuese peruano ó extranjero, paisano ó militar.

Solo en último extremo debe apelarse á la política de sangre; pero no mostremos jamás debilidad.

La política sentimental no ha producido en América más que decepciones. En Méjico nada hemos obtenido. En Venezuela cargamos con una deuda de ochocientos millones de reales, y la recompensa fué el asesinato en un año de 40 hijos de Canarias y la despedida de dos agentes diplomáticos, los señores Rómula y Zambrano. En Montevideo, situación bien rara, mantenemos hace 20 años una legación sin que aquella república se haya dignado aceptar el tratado que reconoce su independencia. Saludó la *Farallana* la bandera del Perú, y nos apresaron la barca *Maria y Julia*. La saludamos de nuevo en 1863, y á los 15 días ocurrieron los sucesos de Talambó.

Véase ahora el contraste: tomamos en Abril de 1864 una actitud enérgica en el Pacífico, y no ha vuelto á ser lastimado ningún español de California al Cabo de Hornos. No nos hagamos ilusiones. En esa América, de donde los españoles fueron ignominiosamente despedidos, necesitamos, ante todo, adquirir fuerza moral, y no se pierda de vista que nuestro prestigio en las Repúblicas se refleja en Cuba y Puerto-Rico. Esa consideración tuvimos presente al dar en el Perú un gran golpe de energía, que resonando en todos los ámbitos del mundo lavase cincuenta años de atrevidas humillaciones.

Espero, señor director, que en prueba de su imparcialidad haya usted las columnas de su periódico á quien se ve precisado á defender su honra, y queda siempre suyo afectísimo seguro servidor,

ROSEBIO DE SALAZAR Y MAZARREDO.

Ayer se reunió en el Congreso la comisión que entiende en el proyecto de cesión del Real Patrimonio, pero no ha llegado á tomar acuerdo alguno.

Hoy se han reunido en el Congreso los diputados de las provincias de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Granada, Alicante, Badajoz, Cádiz, Ciudad-Real, Córdoba, Gerona, Jaén, Tarragona, Toledo, Valladolid y Murcia, por invitación del diputado señor Riquelme, con objeto de ocuparse de la forma en que dichas provincias deben satisfacer el empréstito, y proponerles que sea por cuotas de cada provincia, y no por mayores contribuyentes.

Ayer, según La Libertad, quedaron conformes los ministros en presentar á la mayoría del Congreso como candidato á la presidencia de aquella Cámara al Sr. Alvarez.

Dice La Patria que los amigos del Sr. Moyano aseguran que dentro de pocos días pronunciará este hombre público un discurso que le separará por completo del ministerio.

El senador Sr. Tejada pidió el sábado la palabra para interpretar al Gobierno sobre la separación de los consejeros de Estado que tienen asiento en el alto Cuerpo: el general Narvaez dijo que estaba dispuesto á contestar ante cualquier momento; pero cuando llegó el momento, S. S. fallaba de su sitio, y el Sr. Tejada no pudo explicar la interpelación.

Según La Correspondencia, no tiene hasta ahora fundamento la noticia de que el Sr. González Bravo trate de formular un proyecto regularizando el derecho de petición, como ni tampoco que el Gobierno haya pensado ni piense en la suspensión de las sesiones de Cortes.

Ayer se decía en los círculos políticos que salían del ministerio los señores González Bravo y Castro, procediéndose á una nueva distribución de carteras que diese por resultado la entrada en Ultramar del señor Gutiérrez de la Vega, y en Hacienda del señor Pastor ó de otro sujeto de sus ideas.

El Sr. Favié ha presentado hoy su dimisión de jefe de sección del ministerio de Ultramar.

De los ocho ó diez aspirantes á la dirección de agricultura, parece que el que reúne más probabilidades de salir adelante, es D. Agustín Perales, de la fracción del Sr. Sartorius.

Leemos en La Razon Española:

«El día 13 legará probablemente á Madrid el general Pinzon restablecido del padecimiento que contrajo en el Pacífico sirviendo á su patria.

Por el mismo tiempo llegará á Madrid el general Pareja.

En el recibimiento que se haga á uno y otro general podrá apreciar el Gobierno los grados de honra que ganamos en el Perú con la ocupación de las islas Chinchas, y lo que hemos perdido con el tratado que se acaba de ajustar.»

ULTIMA HORA

TELEGRAMAS.

(Servicio particular de EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.)

PARIS, 6.

El Monitor de hoy dice que el caballero Nigra, ministro del Piamonte, ha sido recibido por el Emperador, á quien ha remitido el título de miembro de la Academia de economía política de Milán.

También ha sido recibido, en el día de ayer, el Sr. Hidalgo, ministro de Méjico, el cual ha entregado al Emperador y al Príncipe imperial el collar de la águila mejicana.

LIVERPOOL, 5.

Las últimas noticias de New-York, que el general Sherman sigue más de cerca al general confederado Beauregard, en marcha en dirección de Charlotte.

El general Sherman proyecta ir á Richmond, siguiendo el camino más breve por Charlotte, Salisbury, Greensboro y Danville.

Si el general Beauregard no puede reunirse con las fuerzas del general Dragg, para obrar de común acuerdo contra Sherman, muy pronto el teatro de la guerra será trasladado á la Virginia.

TURIN, 5.

Mañana lunes, se reunirá de nuevo el Parlamento, cuyas sesiones han sido suspendidas por las fiestas de Carnaval. Seguirá la discusión del proyecto de ley sobre la abolición de la pena de muerte.

Se cree que en toda la semana quedará aprobado este proyecto.

En la Bolsa de hoy se han cotizado los valores á los precios siguientes:

Títulos del 3 por 100 consolidada 44-90 publ.
Títulos del 3 por 100 diferido 40-70 no publicado
Deuda del personal, 20-68 no publicado.
Obligaciones del Estado para subvención de ferrocarriles, 78-50 no publicado.

CORTES.

SENADO.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SEÑOR VICE-PRESIDENTE DUQUE DE VERAGUA.

Sesion celebrada el día 4 de Marzo de 1865.

Abierta á las dos y cuarto, se leyó el acta de la anterior y fué aprobada.

El Senado quedó enterado de la dimisión que hizo del cargo de ministro de Hacienda el Sr. Barzanallana, y del nombramiento del Sr. Castro para dicho cargo.

Juraron y tomaron asiento los senadores electos señores D. Lorenzo Cuenca, D. Juan Villalón, D. Aureliano de Buete, el señor marques de Falces y el señor marques de Villavieja.

El Sr. IRIARTE preguntó á la mesa por qué no se había dado cuenta al Senado con la debida anticipación de la dimisión del Sr. Barzanallana.

El señor PRESIDENTE (duque de Veragua), contestó, que no habiéndose celebrado sesión hasta hoy, no podían dejar de publicarse los Reales decretos en la Gaceta.

El Sr. ARANGO presentó una proposición para que se nombrara una comisión que estudiase las leyes de las provincias ultramarinas.

El Sr. TEJADA pidió al Gobierno señalase día para explicar su interpelación sobre la separación de varios consejeros de Estado que son senadores.

El señor presidente del CONSEJO DE MINISTROS contestó, que podía hacerlo cuando gustase.

El señor BERMUDEZ DE CASTRO preguntó al Gobierno si tendría inconveniente en presentar sobre la mesa del Senado los documentos relativos al tratado de paz que acaba de ajustarse con el Perú, y además si podía tratarse esa cuestión como el Gobierno prometió que se trataría ampliamente cuando llegase su día.

El señor presidente del CONSEJO DE MINISTROS contestó que el tratado firmado con el Perú era sólo preliminar, que aun no estaba ratificado, y que por consiguiente no podía tratarse como cosa concluida; que cuando lo estuviera, entonces no tenía inconveniente en que se discutiese este asunto.

Inmediatamente leyó el tratado ajustado entre el general Pareja y el general Vivanco, que insertamos el sábado.

El Sr. BERMUDEZ DE CASTRO dijo que creía que era asunto concluido, cuando se había dado cuenta de él á los Cuerpos colegisladores; pero si el tratado era provisional, entonces no existía.

El señor ministro de la GOBERNACION, de uniforme, subió á la tribuna y leyó el proyecto de ley de imprenta.

En seguida el señor ministro de FOMENTO, igualmente de uniforme, leyó un proyecto de ley sobre la canalización del Ebro.

Se procedió al sorteo de secciones, é inmediatamente después se levantó la sesión, anunciándose que para la primera se avisaría á domicilio.

Gran las cuatro y cuarto.

CONGRESO.

PRESIDENCIA DEL SR. BELDA, VICE-PRESIDENTE.

Sesion celebrada el día 4 de Marzo de 1865.

Abierta á las dos y media, se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Se anunció que el Sr. Fortuny no podía asistir á la sesión por hallarse enfermo.

El Sr. RIQUELME: Desearía saber si el Gobierno tiene inconveniente en traer al Congreso una nota de las cuotas con que cada provincia debería contribuir en el caso de llevarse á cabo el nuevo anáncipio, y otra de la riqueza imponible de cada provincia.

El señor ministro de HACIENDA: He traído á la Cámara documentos en los cuales están los detalles que pide el señor diputado.

Tenemos además el gusto de contar á nuestro antiguo compañero D. José Campo entre los admitidos en el Senado el 18 de Enero; el señor marques de Vallejo lo fué también en el mismo día. Yo deseo que esté aquí el tiempo posible; pero conviene á las instituciones que cada uno ocupe el asiento que le corresponde.

Debo decir también que el Sr. Sáenz de Llera y otros cuatro señores diputados que votaron ayer, tienen destinos incompatibles con la diputación, y sus casos están pendientes del exámen de una comisión. Yo creo que es preciso que esta incompatibilidad se declare pronto; y entretanto no comprendo cómo un

diputado que está bajo el peso de una incompatibilidad, puede tomar parte en las votaciones.

Yo, por último, ruego al señor presidente que dé el más rápido curso á las notas que faltan venir del ministerio sobre diputados empleados.

El Sr. PRESIDENTE: Respecto de los señores que han sido nombrados senadores, el presidente no puede adoptar determinación ninguna. La asistencia de esos señores al Congreso tiene precedentes: diputados ha habido que han permanecido en el Congreso más de un año después de sus nombramientos de senadores, y entre ellos puedo citar el caso del Sr. Calderón Collantes.

En cuanto á los diputados, la comisión de incompatibilidades es la que puede, presentando pronto su dictamen, apresurar la declaración que S. S. desea.

El Sr. UHAGON: En efecto, ha habido diputados que nombrados Senadores han seguido asistiendo al Congreso. Yo deploro ese hecho, pero no ha habido hasta ahora caso alguno de votar como diputado el que está no sólo nombrado Senador, sino admitido como tal por el Senado.

El Sr. PRESIDENTE: La mesa no tiene medio ninguno para obligar á esos señores á tomar asiento en el Senado. Esos señores leerán las palabras de su señoría, y obrarán como lo crean conveniente á su derecho.

El Sr. UHAGON: Si estas palabras no surten efecto, yo me reservo usar del derecho que tengo como diputado, y presentar una proposición.

ORDEN DEL DIA.

Peticiones.

Sin discusión se aprobaron los dictámenes sobre las señaladas con los números 1.º y siguientes hasta el 8 inclusive.

Juraron y tomaron asiento los señores marques de Villamejor y Thous.

Sin discusión se aprobaron los dictámenes sobre las peticiones números 9 y siguientes hasta el 26.

El Sr. CLAROS anunció al ministro de Hacienda una interpelación sobre contrabando de trigo que se hace en algunas provincias.

El señor ministro de HACIENDA manifestó que se enteraría, y oportunamente contestaría á esta interpelación.

El Sr. ARDANAZ reprodujo su pregunta para que el Gobierno remitiera ciertos datos necesarios ántes de que se pusiera á discusión el proyecto de anti-cipo.

El señor ministro de HACIENDA contestó que había dado las órdenes necesarias para que dichos documentos vinieran mañana al Congreso.

El señor PRESIDENTE dijo que los ministros de Fomento y Guerra habían ya remitido los datos necesarios, y que vista la promesa del ministro de Hacienda, sólo faltaba que los enviase el ministro de Marina, á quien la mesa recordaría este asunto.

Actas.

Sin discusión se aprobaron las de Algeciras, quedando admitido el Sr. D. Manuel Ruiz Tagle.

Acta de Villafroyosa.

Se leyó el acta particular de los señores Hurtado y Ribó, proponiendo la aprobación del acta de Villafroyosa y la admisión del Sr. D. Donisio Lopez Roberts.

El Sr. THOUS la combatió, pero habiendo de extenderse mucho,

Consideremos, pues, las disposiciones que se nos proponen para llenar ese objeto, y veremos que en vez de hacer realizable la ley de 26 de Junio, lo que se hace es matarla, imposibilitar que se lleve a cabo con el objeto para que se hizo. Esa ley era una ley de recursos extraordinarios para atenciones extraordinarias; se decía que los recursos ordinarios bastaban para atender a las cargas ordinarias, pero que habiendo una enorme carga procedente de déficits de presupuestos anteriores, había que atender a enjugar esos déficits con recursos extraordinarios. Las Cortes votaron esos recursos, y yo no entraré ahora a discutir si el pensamiento estaba bien o mal concebido, y si con aquella operación hubiera podido hacerse con los presupuestos ordinarios hubieran marchado en adelante con el desembarazo que les impedía tener la gran deuda flotante que pesaba sobre el Tesoro.

Ahora bien: si este era el objeto de la ley, si era independiente de las cargas ordinarias, ¿qué va a resultar hoy si se vota el proyecto que presenta el Gobierno? Se empieza por tirar por la ventana 300 millones, que no tienen crédito para responder de ellos, y para los 4,000 restantes se pide autorización para colocar 300 millones de billetes en pública subasta al cambio a que pueda hacerse la negociación, lo cual indica ya un quebranto; es decir, que el Gobierno responderá de 300 millones; pero no subirá más que 250 ó 270, ó lo que permita el tipo a que se subastan. ¿Y cuando queda en pie ese déficit de 2.000 millones, ¿podremos creer que se saldará con lo que produzca esa negociación?

Yo he asistido á las sesiones de la comisión, y creo que allí se ha indicado que esos 250 ó 300 millones no se pensaban aplicar á la ley que quería la ley de 26 de Junio, sino á las atenciones ordinarias para las cuales se han consumido ya los recursos hasta el mes de Marzo. Viene, pues, esa negociación á desvirtuar en mi sentir por completo una ley hecha para cubrir gastos extraordinarios con recursos también extraordinarios; por lo tanto, quedará en pie el déficit y mermados los recursos que había para enjugarle, y una vez consumidos esos 250 ó 300 millones, quedaremos en peor situación de la que hoy estamos.

Sé muy bien que se me dirá que esto es el principio de una operación completa; que el proyecto actual sólo tiene por objeto hacer que los fondos entren en condiciones regulares, y que entonces se hará esa emisión y se zanjará por completo la cuestión de Hacienda.

Pero, señores, esto no son más que esperanzas: ¿puede el señor ministro acaso asegurar que esta emisión se podrá hacer en condiciones ventajosas? Yo creo que no: primero, porque la exigüidad de la cantidad pedida, hace creer á todo el mundo que cuando el cobro de esos 300 millones se haya terminado, se habrán consumido todos ellos y llegará á estar la Hacienda en peor situación que ahora.

Además, el Gobierno suya hoy á subasta la mitad de esos 300 millones, y guarda como en reserva el derecho de imponer á los contribuyentes que paguen ciertas cuotas la otra mitad; pero lo probable es que los hombres de negocios que han de dar el dinero dejarán que se haga la imposición forzosa, porque después de ella el papel tendrá que salir á la plaza á precio más bajo por no haber tenido licitadores, y entonces podrán adquirirlos ellos en mejores condiciones.

De modo que, ya por la exigüidad de la suma pedida, comparada con las atenciones que hay que satisfacer, ya por la expectativa de los especuladores, que esperarán á que la negociación tenga mejores condiciones para ellos, siempre se comprende que hay en esta negociación un pensamiento ruinoso que se traduce en una cuestión de confianza. El Gobierno dice que no puede gobernar sin arreglar la Hacienda, y que si hay confianza en él es preciso que se le den medios para salir del apuro del momento, y que luego se verá lo que hay que hacer para arreglarlo del todo; es decir, la confianza en el momento y la incertidumbre después.

Se dice que los hombres de Gobierno no pueden negar á los Gabinetes los recursos que necesitan para gobernar, y esto es, á mi modo de ver, un lamentable error, porque precisamente en estos casos es donde deben ser más severos los Parlamentos. Esto sucede en Prusia, país nacido ayer al régimen representativo, donde el Parlamento niega constantemente hace tres años los recursos necesarios para dar al país cierta organización militar.

Estas son, pues, cuestiones de confianza, y en tal forma se le dio un voto al Gobierno presidido en 1848 por el señor duque de Valencia, que siendo entonces perfectamente definido en política merecía la confianza del país que veía en él al adversario decidido de la revolución.

Pero, ¿estamos hoy en este caso? No; hace años se decía á un Gobierno que se sentaba en ese banco que no gobernaba más que para mandar, porque no resolvía las cuestiones que tenía planteadas, y este cargo fué el que más daño hizo á aquella robusta situación, haciendo que cayera el Gobierno á pesar del estado de prosperidad á que había traído al país.

Vinieron después varias situaciones efímeras, y á ellas sucedió el actual Gabinete, que hizo á todos concebir la esperanza de que saldríamos de aquella situación atea en política, para venir á una situación de creencias; es decir, de soluciones. Sin embargo, viene el Gobierno á las Cortes, y en dos meses de discusión no se hace más que discutir la significación política de uno de los ministros, sin resolver ninguna de las cuestiones que presentan tanto el Sr. Silveira como el Sr. Posada Herrera, anunciando las soluciones que ellos las hubieran dado; á pesar de todo, el Gobierno no ha hecho más que prometer una ley de imprenta y traer la resolución de la cuestión de Santo Domingo, aparte de la cuestión de Hacienda; es decir, la necesaria para vivir.

El Gobierno, pues, viene hoy á pedir confianza con su bandera plegada, y no sólo plegada, sino asomando por encima uno de sus pliegues una de las cabezas de la hidra que le devora. Esto es lo que hay aquí: ¿fuera? Los elementos revolucionarios del país acaudalados, acechando una ocasión propicia, pero esperando tranquilamente, porque todos creen que vendrá de nosotros, como no pueden menos de suceder con la discordia que hoy en nuestro seno.

Ahora bien: con una oposición que presenta las soluciones de todas las cuestiones, con los elementos revolucionarios del país esperando una ocasión propicia, ¿podemos dar un voto de confianza al Gobierno, que no sólo no presenta soluciones, sino que ni siquiera indica la forma en que las adoptará? Es imposible; el país, seguro de que cualquiera de los hombres públicos que capitanean las fracciones aquí representadas conservará el orden público, se aproxima más al que no le pide sacrificios, y se separa del Gobierno, toda vez que hay una fracción que dice que el sacrificio que el Gobierno pide es completamente inútil.

Y este sacrificio, ¿es acaso insignificante? Yo quiero suponer, lo que es muy posible, que esa subasta no dé resultado; entonces el Gobierno impondrá á los contribuyentes 450 millones forzadamente, y la cantidad que antes se consideraba necesaria quedará reducida á 125 ó 130, que será lo único que pueda el Gobierno sacar de la imposición de los 450. Si antes consideraba yo que el Gobierno no podía salir de apuros más que muy momentáneamente con 300 millones, ¿qué le sucederá con 125? Y hay más: el papel sufrirá así un gran crédito, porque los contribuyentes no podrán venderlo al tipo á que se les dé; porque á ese mismo precio no le habrán querido los hombres de negocios, á pesar de que para ellos es más favorable obtenerlo del Gobierno en gran cantidad, que de los particulares en pequeñas porciones.

El Gobierno presenta la combinación de los dos medios: subasta é imposición forzosa en el caso de que aquella dé cierto resultado. Pero ¿y si no ha habido subasta? ¿Cuál será el cambio medio á que hayan de imponerse á los contribuyentes esos billetes si no ha habido subasta? ¿Se les dará á la par? ¿Se les dará al tipo que el Gobierno haya marcado? El proyecto no lo dice. ¿Será acaso el término medio de las proposiciones que hayan hecho los licitadores y que no lleguen al tipo fijado por el Gobierno? Eso sería lo justo, porque ese será el precio de ese papel, fijado por aquellos que lo han de tomar en definitiva; pero entonces, ¿por qué buscar esos imponentes forzados en vez de dar el papel al tipo más alto de los que ofrezcan los licitadores? Yo espero en este punto las explicaciones del señor ministro de Hacienda.

Pero hay también otra circunstancia grave, que es la forma de la imposición, porque esta, aunque se quiera decir que la operación no es una contribución, sino un anticipo, está fuera de todos los principios del partido moderado. Pues qué, si hubiera en España dos contribuyentes bastante ricos para pagar entre ambos 300 millones de contribución, ¿los harías pagar á ellos solos el anticipo? Esto se aplicaría luego por los partidos radicales á las contribuciones, y entonces no os podrías oponer á ese principio, porque habrías sentado vosotros el precedente.

Se me dirá que todos los anticipos se han hecho bajo la misma teoría; pero esto no es exacto; es muy distinto hacer que no pague el pobre, que hacer que solo paguen determinados ricos, porque según el proyecto se empezará por pedir el anticipo al primer contribuyente, y se seguirá pidiendo por orden hasta que se complete: después no se pedirá á nadie, sea rico ó pobre: esto es lo que yo no puedo aceptar.

Pero se me dirá que ha de hacer el Gobierno sino hacer esto. Y en este punto no puedo contestar porque no soy hacendista, pero creo que bien podría hacerse esa emisión de 3 por 100 para que el Gobierno esté autorizado, porque si bien el cambio es bajo, no habrá sido mayor al hacerse otras emisiones, y siempre es preferible emitir 3 por 100 á cambio bajo, á gravar al país con ese anticipo forzoso. Yo pregunto: ¿si el señor ministro de Hacienda pudiera emitir á 50 por 100, no emitiría? Creo que sí; es decir, que no le austaría gravar al país con 36 millones al año: pues entonces, ¿por qué no emite á 40 por 100? ¿Le austan acaso nueve millones más en el presupuesto anual?

Yo lo no comprendo, porque aun suponiendo que la negociación de los billetes hipotecarios se hiciera á 80 por 100, la pérdida para el país sería de los 30 millones que dejaría de percibir el Tesoro, más la diferencia á que luego se había de vender su papel por los contribuyentes, y por fin, más el gravamen de dar de una vez el capital en lugar de crear sólo un censo redimible de 9 millones al año. ¿Creeis, señores, que será menos gravoso el anticipo forzoso que la emisión de que yo os hablo? ¿No veis que, á pesar de la dolorosa impresión que han causado en el país las desgracias de Valencia, no ha podido acudir á remediarlas con más de 20 ó 25.000 duros? ¿Cómo, pues, le vais á exigir que desembolse esa cantidad de 150 millones?

En resumen, señores, yo veo que hay en el proyecto (y por eso apoyo el voto particular), una cosa insignificante para el objeto, porque no servirá más que para salir del paso mientras eso se cobra; veo que hay un voto de confianza, que en la posición política que hoy tiene el Gobierno, á mí no me la inspira, porque tiene la debilidad que lleva consigo su silencio sobre todas cuestiones, por fin, una imposición sobre el país, que este no puede pagar, y que se sustituye á otros medios que causarían nuevos gravámenes, siendo el incentivo para que los hombres de negocios se abstengan de tomar parte en la subasta.

Por esto he leído primero la palabra en contra del dictamen, y luego en favor del voto particular, porque creo que esto es más beneficioso al país; y sin que yo abrigue la esperanza de contribuir con mi voto á que el ministerio continúe ó no en ese puesto, no puedo menos de separarme de él por las razones que he indicado, y porque veo que su conducta no está conforme con lo que yo entiendo que es el interés del país.

El Sr. CANDAU usó de la palabra en contra del voto particular, diciendo que sus aspiraciones eran como habían sido siempre, luchar por la libertad, tal y como él la comprendía, hablando en nombre propio y no con la pretensión de representar á ningún partido, y teniendo por criterio político el que ha tenido siempre, á saber, que el Estado no tenga más misión que la conservación del orden público, la administración de justicia, la representación del país en el extranjero, y en una palabra, cuanto pueda referirse á mantener firmes las bases sociales, oponiéndose á todo lo que sea la intervención del Estado en el desarrollo de los derechos individuales.

Combatió la conducta del Gobierno porque pidió primero 600 millones de reales, como cantidad indispensable para salir de apuros, y ahora se contentaba con 150. Obrando así, el Gobierno había perdido, en concepto del orador, la autoridad moral que debe tener como Gobierno.

Aseguró que el Tesoro público, estando agobiado de deudas y careciendo de crédito, se encontraba muy próximo á la bancarrota.

Iba á explicar las que en su concepto son causas de ésta, cuando por haber pasado las horas de reglamento se levantó la sesión.

Eran las seis.

PARTE RELIGIOSA.

SANTO DE ROY. San Víctor y San Victoriano, mártires.

SANTO DE MAÑANA. Santo Tomás de Aquino, confesor y doctor.

CULTOS RELIGIOSOS.

Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la iglesia de Santo Tomás, donde por la mañana habrá Misa solemne, predicando las glorias del angélico Santo Tomás el doctor D. Ruperto Urra, y por la tarde se cantarán completas, Salve y reserva.

En San Antonio de los portugueses estará Su Divina Majestad expuesta en obsequio del glorioso titular.

Continúan las misiones ayer anunciadas, por la tarde en Santo Domingo y en las Escuelas Pías de San Fernando, y por la noche en San Isidro.

Por la noche habrá ejercicios con sermón, que predicarán: en Santa Catalina de los Donados, D. Cipriano Sevillano; en Italianos, D. Raimundo Carrillo, y en la Bóveda de San Ginés, D. José Losada; en las parroquias, después del Rosario se hará explicación de doctrina Cristiana.

VISITA DE LA CORTE DE MARÍA. Nuestra Señora la Divina Pastora en Capuchinos ó en San Cayetano, ó la de Porta-Celli en San Martín.

Se reza de Santo Tomás de Aquino, confesor y doctor, con rito doble y color blanco, haciéndose conmemoración de la Feria.

PARTE OFICIAL DE LA GACETA.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real familia, continúan en esta corte sin novedad en su importante salud.

REALES DECRETOS.

De acuerdo con mi Consejo de ministros, vengo en nombrar gobernador de la provincia de Logroño á don Dionisio Revuelta, que desempeña igual cargo en la de Cáceres.

De acuerdo con mi Consejo de ministros, vengo en nombrar gobernador de la provincia de Cáceres á don José Justo Madramany, que desempeña igual cargo en la de Almería.

De acuerdo con mi Consejo de ministros, vengo en nombrar gobernador de la provincia de Almería á don Eugenio Sirtorius, cesante de igual cargo en varias provincias.

Dados en Palacio á cinco de Marzo de mil ochocientos sesenta y cinco.—Están rubricados de la Real mano.—El presidente del Consejo de ministros, Ramon Maria Narvaez.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Real decreto.

Habiendo aceptado D. Juan Gaya, diputado á Cortes por el distrito de Seo de Urgel, en la provincia de Lerida, el cargo de jefe de la seccion de construcciones civiles del ministerio de la Gobernacion, vengo en mandar que se proceda á nueva eleccion en dicho distrito con arreglo á la ley de 18 de Marzo de 1846 y su adicional de 16 de Febrero de 1849.

Dado en Palacio á cinco de Marzo de mil ochocientos sesenta y cinco.—Está rubricado de la Real mano.—El ministro de la Gobernacion, Luis Gonzalez Bravo.

VARIEDADES.

REVISTA DE MADRID.

Al fin salimos del Carnaval, lo cual viene á ser como haber salido de un mal paso.

Si las trescientas mil almas que nos juntamos en la capital de la Monarquía son pretexto de vivir en el pueblo más adelantado de España, no necesitáramos pasar las veinticuatro horas del día en la calle, no comprendería yo cómo cien mil personas medianamente sensatas y mil quinientos coches de más ó menos lujo se habían de buscar, estrechar, oprimir y casi ahogar formando corrientes encontradas y remolinos interminables de hombres, de mujeres, de niños, de caballos y de coches desde la Fuente Castellana al paseo de Atocha para presenciar el insulso espectáculo de doscientos tontos que vestidos sin gracia pasean entre la multitud apiñada la pobreza de unos cuantos trages, la miseria de sus respectivas invenciones y alguna que otra indecencia.

Este ha sido el Carnaval mirado por su parte divertida.

Antes esta función era una locura, ahora ha empezado á ser una tontería.

El ingenio de las máscaras ha perdido, digámoslo así, la careta.

Mas es preciso ser justos: ese no es más que un lado del Carnaval, y en Madrid presenta esta fiesta otra cara que sin duda alguna debe ser la cara que en estos tiempos le corresponde.

El Carnaval en el Pradío es una cosa, y en las calles de Madrid es otra.

Desde la Fuente Castellana al paseo de Atocha es una locura convertida en tontería, la más necia de las confusiones.

Desde un extremo á otro de las calles de Madrid, el Carnaval varía de aspecto, y viene á ser el ejercicio de un derecho político aplicado á la industria.

Hay un número de ciudadanos que toman el Carnaval por su lado útil, haciendo de la broma un negocio.

Esta operación está reducida á aplicar un gran capital de desvergüenza á la alegría de la multitud.

Cuarenta ó cincuenta cuadrillas compuestas de diez ó doce ó quince personas cada una, armadas de instrumentos más ó menos musicales, recorren durante el día las calles de Madrid, acometiendo á cuantos bolsillos se encuentran, sea cualquiera la forma en que se les presenten.

Estos ciudadanos han hecho de la palabra Carnaval una traducción libre.

Para todos los demás esta palabra significa tres días de gastos extraordinarios; para aquellos ciudadanos significa tres días de ingresos ordinarios.

Para toda persona decente, pobre ó rica, alta ó baja, loca ó cuerda, el Carnaval es una resta hecha sobre su bolsillo; para cualquiera de esos ciudadanos en cuadrilla, el Carnaval es una suma.

Es la agregación de todos los bolsillos ajenos á unos cuantos bolsillos propios.

En estos días la sociedad de Madrid se divide en dos clases: una que se considera obligada á gastar más de lo que debe, y otra que se declara á sí misma con derecho á pedir todo lo que quiere.

El derecho de petición llevado á este punto por la libertad del Carnaval, produce una nueva industria que tiene su nombre propio y se llama estafa.

Yo no sé cómo la administración pública no ha incluido ya á estos especuladores en la matrícula del subsidio industrial y de comercio, imponiéndoles la cuota de contribución correspondiente.

Desde este punto de vista el Carnaval es una encrucijada en que ochenta vagos por regla general, tienen derecho á meter la mano en los bolsillos ajenos para poder acudir durante esos tres días á las urgentes necesidades de sus vicios.

Y este dinero que sacan á título de máscaras y que se consume en las fondas, en las tabernas y en los bailes, se extrae á la fuerza del bolsillo de la gente que cruza por las calles.

La desvergüenza es una pistola que estos estafadores permitidos ponen al pecho de sus víctimas sin que estas tengan derecho á poder gritar «ladrones».

No es que se pide como pide un pobre cuyos hijos tienen hambre con la voz baja y la mano trémula y al cual podemos todos decir: «perdone Vd. por Dios, hermano».

No es eso: aquí se trata de una acometida violenta, á mano armada, de una persecución irresistible en que no hay más remedio que abrir el bolsillo para salir de apuro.

Es la impertinencia convertida en puñal, la desvergüenza convertida en ganza; no es pedir, es sacar.

Estas cuadrillas no confían en la voluntad de aquellas cuyos bolsillos buscan, sino en la violencia que van á ejercer sobre ellos en medio de la multitud, á la luz del día y delante de la Guardia civil.

Otro aspecto tiene el Carnaval, aspecto, digámoslo así, privado, pues sólo se presenta dentro del recinto de cuatro paredes.

Esta tercera fisonomía del Carnaval son los bailes de máscaras.

El hombre es libre, y por lo tanto no ha encontrado razón para privarse de ir á esos bailes, y va en uso de su libre voluntad.

Las mujeres ¡vergonzoso atraso! no son aun todas libres, por cuya causa las que no lo son se consideran condenadas á la esclavitud de tener honestidad, por lo cual han convenido en que no les es permitido asistir á esos bailes mientras no se conquisten la libertad.

Con esto quiero decir que ninguna mujer honesta va ya á los bailes de máscaras, porque estas fiestas han llegado á ser aquí tan libres que no consisten ni en las cadenas del decoro.

Los bailes de máscaras se parecen aquí al rastro, pues en ellos se encuentra todo lo que está más perdido.

Esto es tan claro, que en los bailes de máscaras de Madrid, sólo se encuentran los desechos de la sociedad.

Son como si dijéramos los vasos en que desaguan todas las alcantarillas de la población.

Los bailes de máscaras, son aquí la exaltación de todos los sentidos y la condenación del sentido moral.

Son fiestas consagradas á la libertad absoluta de las costumbres.

Vamos á otra cosa, que viene á ser la misma.

Segun las noticias que corren, parece que se ha descubierto un gran criminal, que valiéndose de los recursos del Carnaval permanente en que vivimos, ha podido hasta hoy burlar la vigilancia del gran tribunal de la opinión pública.

Al fin parece que se le ha podido arrancar la careta, y no ha tenido más remedio que soltar el disfraz y desdibujarse.

Este reo, que casi está en capilla, debe ser el causante de todos los males que experimentamos y el encubridor de todos los delitos que quedan impunes.

Digo esto porque se ha levantado contra él un clamor tan universal, que se ha convenido en la necesidad de castigarle.

La indignación contra este cómplice de todas nuestras desdichas es tal que se ha empezado á castigarlo sin andar con esos rodeos, esas vueltas y revueltas que se llaman forma de causa.

Hasta ahora había pasado no solamente por hombre de bien, sino por el elemento indispensable: á él se le debía todo: gobierno, orden, prosperidad y justicia.

Todos los años se le hacía pasar por la prueba de un juicio contradictorio de la que ha salido siempre aumentado, pero por lo que se ve nunca corregido.

Este criminal es el presupuesto.

Castigar el presupuesto: hé aquí la salvación de nuestra sociedad.

Al fin se nos caído la venda de los ojos.

Aquí se ha cometido un gran crimen en el cual todos nos encontramos complicados.

La justicia no puede quedar desairada.

Se necesita un castigo.

¿Podemos ser nosotros jueces de nosotros mismos? Esto sería inicuo.

Pues bien, castigárese el presupuesto.

Y es una gran justicia.

El presupuesto es una suma de dos mil millones; castigarlos es castigar el dinero, es lo mismo que castigar al espíritu del siglo, á los adelantos de la época.

Es azotar á la prosperidad pública, es la prision preventiva de los adelantos materiales que nos hacen tan grandes, tan buenos, tan justos y tan dichosos.

Castigar el presupuesto es acusar al progreso y es imponerle una multa al Gobierno.—J. S.

Merced de Madrid.

ENTRADO POR LAS PUERTAS EN EL DIA DE AYER.

11079 fanegas de trigo.

2583 arrobas de harina de idem.

11894 arrobas de carbón.

142 vacas que componen 56354 libras de peso.

307 certeros que hacen 6774 libras de peso.

78 cerdos degollados que hacen 12343 libras de peso.

PRECIOS DE ARTICULOS AL POR MAYOR Y MENOR EN EL DIA DE AYER.

Reales vellon arroba. Cuartos libra.

Carné de vaca.	52 á 56	20 á 24
Id. de cordero.	54 á 58	20 á 24
Id. de ternera.	58 á 62	20 á 24
Despojos de cerdo.	98 á 98	42 á 51
Tocino añejo.	85 á 89	30 á 32
Id. fresco.	85 á 89	26 á 30
Id. en canal de ayer.	78 á 80	24 á 26
Lomo.	8 á 10	42 á 51
Jamon.	130 á 144	51 á 60
Aceite.	64 á 66	18 á 20
Vino.	42 á 48	12 á 14
Pan de dos libras.	8 á 10	11 á 13
Carbanzos.	42 á 62	16 á 24
Judías.	26 á 34	10 á 14
Arroz.	30 á 38	10 á 14
Lentejas.	19 á 23	8 á 10
Carbon.	7 á 8	2 á 3
Jabón.	60 á 64	20 á 20
Papas.	6 á 7	2 á 3

PRECIOS DE GRANOS EN EL MERCADO DE AYER.

Trigo. de 44 á 48 Rs. vd.

Cebada. de 28 á 30 Id.

Algarroba. de 6 á 32 Id.

Lo que se anuncia al público para su inteligencia. Madrid 5 de Marzo de 1895.—El alcalde-corregidor, conde de Belascolin.

Fondos públicos.

CAMBIO AL CONTADO.

Publicado. No publicado.

Títulos del 3 p. consolidado.

Inscripciones en el Gran Libro al 3 p. id.

Títulos del 3 p. consolidado.

Inscripciones en el Gran Libro.

Material del Tesoro preterente con interés.

Idem no preterente, con interés.

Idem sin interés.

Participes legos convertibles á 3 p. id.

Idem del 4 y 5 por 100.

Deuda amortizable de primera clase.

Idem amortizable de segunda idem.

Deuda del personal.

Deuda municipal de sisas del ayuntamiento de Madrid, con 2 1/2 de interés anual.

ACCIONES DE CARRETERAS GENERALES, 3 p. ANUAL.

Emisión de 1.º de Abril de 1850, de 4.000 rs.

Idem de 2.000 rs.

Idem de 1.º de Junio de 1851, de 2.000 rs.

Idem de 31 de Agosto de 1852, de 2.000 rs.

Idem de 9 de Marzo de 1855, procedente de la de 13 de Agosto de 1852, de 2.000 rs.

Idem 1.º de Julio de 1856 de 2.000 rs.

Acciones de Obras públicas de 1.º de Julio de 1858.

Del Canal de Isabel II, de 1000 rs. 8.º 0.º anual.

Obligaciones del Estado para subvenciones de ferrocarriles. s. c.

Acciones del Banco de España.

ESPECTACULOS.

TEATRO REAL. Funcion para hoy á las ocho de la noche.—Martha.